



Señores
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO JUDICIAL (REPARTO)
BOGOTÁ D.C.
E. S. D.

notificaciones.prejudiciales@mindefensa.gov.co
decun.notificaciones@policia.gov.co
notificaciones_judicialesalcaldia@pereira.gov.co
procesosordinarios@mindefensa.gov.co
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co

Asunto:	Demanda
Demandantes:	Armando Sánchez y otros
Demandadas:	La Nación – Ministerio de Defensa La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional Municipio de Pereira
Otros	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE NIT: 900507741-1 Notificaciones judiciales notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co
Link pruebas y anexos	https://drive.google.com/drive/folders/1p7XRBlDzBo1B9npH7CfKRzfULkbFUa3M?usp=sharing

Jonathan Velásquez Sepúlveda, identificado con cédula de ciudadanía 1.116.238.813 y tarjeta profesional 199.083 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de representante legal y profesional del derecho inscrito en el certificado de existencia y representación legal de Legalgroup Especialistas en Derecho S.A.S. con NIT 900.998.405-7, persona jurídica apoderada¹ judicial de las personas relacionadas en el acápite de demandantes, según poderes adjuntos, y en uso de las facultades allí otorgadas, a través del presente escrito formulo demanda en ejercicio del medio de control de **REPARACIÓN DIRECTA** contenido en el artículo 140 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA- Ley 1437 de 2011,² en contra de **La Nación – Ministerio de Defensa, La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional y el Municipio de Pereira**, con ocasión de presunta responsabilidad administrativa atribuible como consecuencia del *falso positivo* ejecutado por las entidades convocadas al llevar a cabo la demolición del inmueble ubicado en la calle 11 # 5-16 del Barrio la Libertad de la ciudad de Pereira, el pasado 18 de marzo de 2022, donde representantes de las entidades demandadas ante los medios de comunicación nacional, señalaron dicho inmueble como lugar de expendio y consumo de alucinógenos, así mismo, como un foco de inseguridad para la comunidad; afirmaciones producto de un montaje, que acaecieron como consecuencia de las fallas en el servicio en las que incurrieron las demandadas, acorde con los fundamentos de hecho y de derecho que se desarrollarán en el presente escrito.

¹ **Artículo 75 C.G.P.:** “Designación y sustitución de apoderados. Podrá conferirse poder a uno o varios abogados. Igualmente podrá otorgarse poder a una persona jurídica cuyo objeto social principal sea la prestación de servicios jurídicos. En este evento, podrá actuar en el proceso cualquier profesional del derecho inscrito en su certificado de existencia y representación legal. Lo anterior, sin perjuicio de que la persona jurídica pueda otorgar o sustituir el poder a otros abogados ajenos a la firma. Las Cámaras de Comercio deberán proceder al registro de que trata este inciso.”

² Modificada por el Ley 2080 de 2021.



1. Individualización de las partes y su legitimación en la causa

Con relación a la legitimación en la causa, el Consejo de Estado ha manifestado lo siguiente:

"[...] La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y el material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.

A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

Tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial³. (negrilla y subraya fuera de texto original)

Cuestión previa

Con el fin de acreditar la legitimación en la causa de las personas demandantes, es necesario poner en conocimiento la relación del grupo demandante con el bien inmueble que se traerá a colación, haciendo la siguiente aclaración:

1. En primer lugar, **el inmueble ubicado en la calle 11 # 5 - 6 de la ciudad de Pereira**, tal como obra en el certificado de tradición y libertad⁴, la **propiedad** del mismo se encuentra en cabeza de la señora **Graciela Jaramillo Arango (Q.E.P.D.)**,⁵ quien en vida mediante la **escritura pública No. 1562 del 15 de junio de 1966**⁶ **otorgada ante la Notaria Tercera de Cali**, dispuso su **testamento abierto**, en el cual designó a la señora **Teresa Sánchez Jaramillo (sobrina)** como su única y heredera universal y a falta de esta, se estableció que sería el señor **Armando Sánchez (hijo de la Sra. Teresa)** el heredero universal.

Se sabe que la **defunción de la señora Graciela Jaramillo Arango**, se dio el día **19/09/2009**⁷, sin que a la fecha se haya adelantado proceso de sucesión alguno, con el fin de adjudicar el bien inmueble a los que fueron nombrados herederos.

2. Al momento de los hechos, el bien se encontraba en posesión de los señores Teresa Sánchez y Armando Sánchez, quienes, por más de 40 años ejercieron actos de posesión, por lo tanto, fueron ellos y su grupo familiar los directamente afectados por los hechos ocurridos el día 18 de marzo de 2022 y los cuales causaron gran afectación a su honra y buen nombre.

La señora **Teresa Sánchez Jaramillo**, **falleció el día 20 de junio de 2023**, es decir, para la época de los hechos ella tenía la posesión del bien inmueble objeto del presente trámite, y que, si bien nunca se ejerció el derecho de herencia sobre ese inmueble, si se ejerció la posesión con actos del señorío sobre este. Aclarado lo anterior, para el presente asunto, los extremos activos y pasivos se integran de la siguiente manera:

³ Véase la sentencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección A. Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico. Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 50001-23-31-000-2012-00159-01(59503)

⁴ Ver prueba 12. Certificado de tradición y libertad

⁵ Ver prueba 4. RCD Graciela Jaramillo

⁶ Ver prueba 11. Escritura pública

⁷ Ver prueba 4. RCD Graciela Jaramillo



1.1. Demandantes - Legitimación en la causa por activa.

Grupo demandante por el daño antijurídico causado por las actuaciones arbitrarias desplegadas con ocasión del falso positivo ocurrido el 18 de marzo de 2022.

Nombre	Documento	Identificación	Calidad frente a las víctimas
Masa sucesoral de la señora Teresa Sánchez Jaramillo	C.C RCD	24.891.845 10814303	Víctima
Armando Sánchez	C.C.	10.060.255	Víctima (hijo de Teresa Sánchez)
Maria Leticia Guerrero Melchor	C.C	25.039.239	Compañera permanente de Armando Sánchez
Carlos Andrés Sánchez Guerrero	C.C.	10.034.690	Hijo de Armando Sánchez
Maria Camila Sánchez Obando	T.I	1.088.832.226	Nieta de Armando Sánchez
Luz Nancy Guerrero Melchor	C.C	25.038.514	Cuñada de Armando Sánchez
Valentina Guerrero Melchor	C.C	1.090.332.695	Sobrina política de Armando Sánchez

Inicialmente, frente a este punto es menester indicar que, con relación a las pretensiones indemnizatorias formuladas en la presente demanda, el señor **Armando Sánchez y su familia**, se vieron afectados por los **hechos ocurridos el 18 de marzo de 2022**, como consecuencia de la acción desplegada por las autoridades demandadas sobre el bien inmueble ubicado en la calle 11 # 5-16 del barrio la Libertad de la ciudad de Pereira.

A hora bien, al proceso concurren: **La masa sucesoral de la señora Teresa Sánchez**, víctima directa, representada por su hijo **Armando Sánchez**, quien, además, concurre en calidad de víctima directa,

su compañera permanente **María Leticia Guerrero Melchor**, **Carlos Andrés Sánchez Guerrero**, en calidad de hijo de Armando Sánchez, **María Camila Sánchez Obando**, actuando en calidad de nieta, representada por su padre Carlos Andrés Sánchez Guerrero, **Luz Nancy Guerrero Melchor**, actuando en calidad de cuñadas, y **Valentina Guerrero Melchor**, actuando en calidad de sobrina política, hija de la señora Libia guerrero Melchor.

a. **Representación de la masa sucesoral de la señora Teresa Sánchez Jaramillo (Q.E.D.P.):**

Inicialmente, frente a este punto es menester indicar que, con relación a las pretensiones indemnizatorias formuladas en el presente escrito de conciliación, **Teresa Sánchez Jaramillo**, **víctima directa**, falleció el día 20 de junio de 2023, más de 1 año después de ocurridos los hechos objetos del presente trámite, por lo tanto, entre el 18 de marzo de 2022 y la fecha de su fallecimiento, sufrió un gran sufrimiento, angustia y congoja que fueron generados por los irresponsables y falsos señalamientos hechos por las entidades convocados en relación con los actos que supuestamente se estaban adelantando en su inmueble.



Ahora bien, al proceso concurre: Armando Sánchez, **en representación de la masa sucesoral de Teresa Sánchez Jaramillo (q.e.d.p.)**. Esto es así porque como lo ha reseñado el Consejo de Estado en su Jurisprudencia, el derecho a obtener una indemnización por perjuicios materiales e inmateriales de Teresa Sánchez Jaramillo (q.e.p.d.), por tener un contenido económico, se transmitió a sus sucesores *mortis causa*; de ahí que, es claro que éstos se encuentran legitimados para reclamar la reparación, cuya titularidad recaía en el causante⁸.

Teniendo en cuenta lo anterior, el suscrito representante judicial considera pertinente resaltar lo expuesto por las normas civiles sobre dicho tema, en cuanto su carácter general y lo reglado en la normativa procesal.

Como primera medida, expone el código civil en su artículo 1155:

“ARTÍCULO 1155. HEREDEROS A TITULO UNIVERSAL. Los asignatarios a título universal, con cualesquiera palabras que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son herederos; representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles.

Los herederos son también obligados a las cargas testamentarias, esto es, a las que se constituyen por el testamento mismo, y que no se imponen a determinadas personas”.

A su vez, el artículo 53 del C.G.P., establece la capacidad procesal en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 53. CAPACIDAD PARA SER PARTE. Podrán ser parte en un proceso:

- 1. Las personas naturales y jurídicas.*
- 2. Los patrimonios autónomos.*
- 3. El concebido, para la defensa de sus derechos.*
- 4. Los demás que determine la ley”.*

Como se observa de la normativa en cita, es claro pues, que la vocación sucesoral, nace del sentido mismo que le da la capacidad legal otorgada por la situación jurídica existente del parentesco que se tenga con el testador causante, hecho este, que puede ser probado con las actas de estado civil –entiéndase registro civil de nacimiento y registro civil de defunción del causante- cuando el derecho reclamado es en estricto **sentido para la masa sucesoral y no de manera singular para una persona en particular**; por consiguiente, cualquiera de los herederos a título universal tendría capacidad jurídica y estaría legitimado para reclamar **en nombre de la sucesión, pero no a título personal**, como ocurre en el caso que nos ocupa, donde Armando Sánchez, hijo de la causante, acuden en representación de la masa sucesoral de su madre Teresa Sánchez Jaramillo (q.e.p.d.).

Respecto al tema, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha precisado:

⁸ Al respecto puede consultarse la sentencia de la Sección Tercera de 10 de septiembre de 1998, exp. 12009, C.P. Daniel Suárez Hernández, reiterada en Subsección B, sentencia de 31 de agosto de 2015, exp. 36175, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Entre otras.



“d). En ese contexto, cabe precisar que la Corte Suprema para orientar la solución frente a la problemática que surge cuando se debe formular una demanda ante la muerte de la persona que debía comparecer en calidad de accionada, en fallo de 5 de diciembre de 2008, exp. 2005-00008, en lo pertinente memoró:

“[...] fallecida la persona se abre su sucesión en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, los cuales, bajo los parámetros de la ley (ab intestato) o del testamento (testato), pasan a sus herederos in totum o en la cuota que les corresponda, excepto los intuitus personae o personalísimos.

“La sucesión mortis causa, presupone muerte, real o presunta, no es sujeto iuris ni ostenta personificación jurídica (cas. civ., sentencia de 27 de octubre de 1970), apenas constituye un patrimonio acéfalo que debe ser liquidado.

“En tal hipótesis, los herederos, asignatarios o sucesores a título universal, son continuadores del de cuius, le suceden y le representan para todos los fines legales (artículos 1008 y 1155, Código Civil), pues, ‘como la para todos los individuos de la especie humana (...) para ser capacidad parte de un proceso está unida a su propia existencia, como la sombra al cuerpo que la proyecta, es palmario que una vez dejan de existir pierden su capacidad para promover o afrontar un proceso. Y ello es apenas lógico, porque la capacidad de los seres humanos para adquirir derechos o contraer obligaciones, es decir, su capacidad jurídica, atributo determinante para que, en el mundo del derecho, puedan ser catalogados como personas, se inicia con su nacimiento (art. 90 del C. C.) y termina con su muerte, como lo declara el artículo 9o. de la ley 153 de 1887’. (...) ‘Sin embargo, como el patrimonio de una persona no desaparece con su muerte, sino que se transmite a sus asignatarios, es evidente que sus derechos y obligaciones transmisibles pasan a sus herederos, quienes como lo estatuye el artículo 1155 del Código Civil representan la persona del de cuius para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles’ ‘es pues el heredero, asignatario a título universal, quien, en el campo jurídico, pasa a ocupar el puesto o la posición que, respecto a sus derechos y obligaciones transmisibles tenía el difunto. **Por tanto, es el heredero quien está legitimado para ejercer los derechos de que era titular el causante y, de la misma manera está legitimado por pasiva para responder por las obligaciones que dejó insolutas el de cuius (...)** Si se inicia un proceso frente a una persona muerta, la nulidad de lo actuado debe ser la sanción para ese proceder, pues el muerto, por carecer ya de personalidad jurídica, no puede ser parte en el proceso. Y aunque se le emplace y se le designe curador ad litem la nulidad contagia toda la actuación, pues los muertos no pueden ser procesalmente emplazados, ni mucho menos representados válidamente por curador ad litem [...]”⁹ (Negritillas y subrayas fuera de texto original).

En otro pronunciamiento, la alta Corporación, hizo mención respecto de la capacidad procesal de la masa sucesoral distinguiéndola de la siguiente manera:

“[...] Al no ser la sucesión ilíquida sujeto de derechos ni de obligaciones, no tendría capacidad para ser parte en un proceso determinado y, por lo mismo, no sería posible atribuirle una representación legal. Sin embargo, siguiendo la teoría del patrimonio autónomo, tal circunstancia no significa que esa universalidad de bienes no pueda demandar ni ser demandada por conducto de sus herederos, quienes como administradores de la masa indivisa, deben asumir el debate judicial en defensa de los intereses de la comunidad, desde luego no a nombre propio porque no se trata de una legitimación personal,

⁹ CSJ-Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de julio de 2013 proferida dentro del expediente con radicado No. 11001-0203-000-2007-00771-00 con ponencia de la Dra. Ruth Marina Díaz Rueda. (P.171 y siguientes)



pero tampoco en nombre de un tercero, porque como ya se dijo, ciertamente no existiría sujeto de derecho a quien representar.

*Si la capacidad para ser parte viene a ser la cualidad (aptitud) que tiene la persona para ser titular (sujeto) de la relación jurídico procesal, resultaría incomprensible, tal cual lo dijo la Corte en sentencia de 20 de marzo de 1992[2], entre otras, que “al juez, no obstante haber constatado la ausencia de la capacidad para ser parte del proceso, le fuera dable calificar de mérito la cuestión debatida, pues si se tiene advertido que falta este presupuesto, no sería posible decidir que el sujeto cuya existencia procesal no ha quedado fijada, si lo puede ser, en cambio, de la relación sustancial materia del pronunciamiento jurisdiccional, entre otras razones, **porque la capacidad para ser parte debe aparecer o ser verificable en todos los supuestos en que esté de por medio una relación jurídica, la cual no puede configurarse más que entre sujetos, es decir, entre términos a los cuales el Derecho dota de aptitud o de capacidad para desempeñarse como tales**”.*
[...]

Siguiendo la tesis sobre que la sucesión no es sujeto de derechos y de obligaciones, la Corte en la sentencia citada reiteró la doctrina elaborada desde el fallo de 21 de junio de 1959, según la cual las cuestiones atinentes a la demostración de la calidad de heredero de quien actúa como tal “pertenecen al campo procesal y no al sustancial, vale decir, corresponde...a uno de los presupuestos del proceso, y no a una de las condiciones de la acción civil, como se había venido sosteniendo”. De lo cual infirió para entonces “que la ausencia de prueba sobre el carácter de heredero implica sentencia inhibitoria con consecuencias de cosa juzgada formal y no de sentencia de mérito, con consecuencias de cosa juzgada material”.

3. En el presente caso, habiendo invocado la demandante su condición de heredera en la sucesión de su tía MARIA DE LOURDES BEDOYA DE HERRERA, por derecho de representación de su padre premuerto LUIS EDUARDO BEDOYA HERNANDEZ, debió **ineludiblemente presentar las pruebas del estado civil para acreditar el parentesco.**

3.1. Con ese propósito, esto es, con el fin de demostrar **la condición de hija legítima del representado, la actora presentó, además de su registro civil de nacimiento (fol. 2, C-1), la partida eclesiástica del matrimonio de sus padres (fol. 1, /ib/).**

Como el hecho del matrimonio ocurrió el 24 de mayo de 1940, según lo tiene explicado la Corte (sent. de 12 de julio de 1988, G.J. t. CXCI, pág. 18), su prueba podía “ajustarse voluntariamente a las exigencias de la ley posterior”, /o /“probarse bajo el imperio de la otra, por los medios que aquella establecía para su justificación”. /Criterio este que igualmente se expuso en sentencia de 30 de marzo de 1998”¹⁰ (negritas y subrayas fuera de texto).

De conformidad con lo anterior, según lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia, cuando una persona fallece, los herederos poseen la representación de la herencia y pueden reclamar para la sucesión, los derechos del interfecto.

De su parte, el Consejo de Estado en su jurisprudencia **ha admitido la procedencia de la indemnización de perjuicios morales a favor de la masa sucesoral de quienes**, en vida sufrieron un daño antijurídico que consecuentemente generó unos

¹⁰ Ver CSJ- SCC- sentencia del 01 de abril de 2001, expediente 6111. Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez



perjuicios de índole material e inmaterial pero que, al momento de impetrarse la respectiva acción, la víctima de ese daño ya había perecido.

Frente al tema, el Consejo de Estado en uno de sus pronunciamientos relacionado con la materia objeto de debate se refirió de la siguiente manera:

“[...] el derecho a obtener la reparación de los perjuicios morales es de carácter patrimonial y como tal se trasmite a los herederos, habida consideración de que en el ordenamiento jurídico nacional no existe disposición que prohíba dicha transmisión; por el contrario, la regla general es que todos los activos, derechos y acciones de carácter patrimonial forman parte de la masa herencial y, además, el reconocimiento de ese derecho guarda armonía con los principios informadores del ordenamiento jurídico en materia de daño resarcible y, en especial, con las normas constitucionales que establecen el derecho a la indemnización por todos los daños antijurídicos sufridos (art. 90).”

“En síntesis, que el derecho a la indemnización por el perjuicio moral se trasmite porque se trata de un crédito que puede ser reclamado, bien por su titular o por sus sucesores mortis causa, en cuanto continuadores de su personalidad, que ocupan la posición jurídica que ostentaba el causante frente a la totalidad de los derechos y acciones de contenido patrimonial transmitidas por el fallecimiento.”

“(…).

“De manera reciente¹¹, la Sala ha reiterado dicha jurisprudencia, en los siguientes términos:

‘[...]si bien es cierto los perjuicios morales dependen necesariamente del sentimiento de un individuo en particular, cuando se solicita el reconocimiento de estos por parte de los sucesores procesales, no es que se transmita el dolor, la angustia o la congoja causada por el daño a quien en vida lo padeció y sufrió..., **lo que se transmite es el derecho a reclamar por tal sufrimiento de la persona que era titular del mismo y, por ende, legitimada para demandar**’.

“Por tanto, en el caso concreto, los herederos del señor (...), quien falleció el 4 de enero de 1995, según el certificado del registro civil de su defunción (fl. 12)... estaban legitimados para reclamar no sólo la indemnización por los perjuicios materiales que sufrió con la muerte de éste, reclamación sobre la cual no hay discusión doctrinaria, sino también por los perjuicios morales que el mismo hecho le hubiere causado”¹² (se destaca).

Sumado a lo anterior, también ha sostenido esa alta Corporación:

“[...] Ahora, una de las formas de adquirir la condición de heredero es precisamente por ministerio de la ley, conforme a lo dispuesto en el Código Civil en los artículos 1008, 1010, 1011, 1239 y 1240, entre otros, y para el caso que nos ocupa, en el que se trata de quienes han adquirido esta condición en razón a la declaratoria de muerte presunta de su padre, lo ha dispuesto el estatuto Civil en su artículo 100.

Visto lo anterior, y conforme al análisis que se hace del material probatorio, la Sala no solo encuentra probada la calidad de herederos de los demandantes, sino,

¹¹ Original de la cita: sentencia de 10 de marzo de 2005, expediente 16.346.

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de abril de 2006, expediente 14.908.



además, que el padre de éstos era el propietario de parte de los semovientes que fueron embargados y secuestrados en el proceso de alimentos adelantado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas –Guajira, que aluden como parte de la masa herencial que fue afectada por la pérdida de los mismos.

En este punto de la providencia, es oportuno recordar que las consideraciones de forma en los procesos judiciales como garantías procesales de las partes no se justifican en sí mismas, sino en razón de los fines de la administración de justicia, entre otros, la verdad material y por ende, la efectividad del derecho sustancial¹³.

Ahora, surge para la Sala el siguiente interrogante: **¿Puede un heredero, en su condición de tal, pedir para sí, como demandante o está obligado a pedir para la sucesión?**

La Sala observa que en el sub-lite, los demandantes sustentan su aspiración indemnizatoria del daño antijurídico, que aducen les fue causado por la entidad demandada, **en virtud de los derechos patrimoniales que la ley les otorga como herederos de su padre, quien era el titular del derecho de propiedad respecto de los semovientes embargados y secuestrados en el proceso que por alimentos se adelantó contra éste, y que se constituye en el objeto de sus pretensiones.**

Pues bien, en casos como el que hoy nos ocupa, esta Corporación ha dicho:

En la sentencia del 27 de marzo de 1992¹⁴, la corporación resolvió negar las pretensiones de la demanda, al encontrar que se configuraba respecto del demandante la falta de legitimación en la causa por activa, pues tratándose de una demanda de revisión impetrada en contra del acto administrativo que declaro la extinción del derecho de dominio de un predio rural que, según el libelo, pertenecía a los padres fallecidos de éste, respecto de quienes, para ese momento, no se habría iniciado proceso de sucesión, **se consideró que el actor en esa litis debió pedir para las sucesiones de sus progenitores, dado que su derecho de acción lo derivaba de su calidad de heredero y no de dueño singular de tal inmueble.**

En otra oportunidad, la Corporación resolvió apelar a la hermenéutica jurídica, para efectos de tener por legitimados en la causa por activa a los demandantes que habían invocado su calidad de herederos y que, no obstante señalarlo así, no pidieron expresamente para la sucesión. En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado¹⁵ sostuvo que el juez de primera instancia debió interpretar racionalmente tanto el poder como la demanda, para entender, sin lugar a equívocos, que los accionantes al pedir en su carácter de herederos, en ese caso de la señora Lía Vejarano de Zambrano, **estaban demandando para la sucesión de ésta.**¹⁶

En otra oportunidad, la Corporación resolvió apelar a la hermenéutica jurídica, para efectos de tener por legitimados en la causa por activa a los demandantes que habían invocado su calidad de herederos y que, no obstante señalarlo así, no pidieron expresamente para la sucesión. En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado¹⁷ sostuvo que el juez de primera instancia debió interpretar racionalmente tanto el poder como la demanda, para entender, sin lugar a equívocos, que los accionantes al pedir en su carácter de herederos, en ese caso de la señora Lía Vejarano de Zambrano, **estaban demandando para la sucesión de ésta.**¹⁸

¹³ Ver sentencia C-131 de 2002.

¹⁴ Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente 5.986.

¹⁵ Sentencia del 30 de octubre de 1992. Expediente 7.016.

¹⁶ Sentencia de tutela del diecinueve (19) de febrero de dos mil nueve (2009). Expediente T-1822180

¹⁷ Sentencia del 30 de octubre de 1992. Expediente 7.016.

¹⁸ Sentencia de tutela del diecinueve (19) de febrero de dos mil nueve (2009). Expediente T-1822180



Con relación a las **pruebas que acreditan la legitimación en la causa por activa** de las personas que acuden al proceso como demandantes, se encuentran las siguientes especificaciones, con las cuales se comprueba su calidad de parte:

- El señor **Armando Sánchez**, identificado con cédula de ciudadanía 10.060.255, en calidad de **hijo** de la señora Teresa Sánchez y víctima directa, además como representante de la Masa sucesoral de la señora Teresa Sánchez, situación acreditada con el registro civil de nacimiento que reposa en la notaria 1 del círculo de Pereira en el Tomo 32B, folio 581¹⁹.
- La señora **María Leticia Guerrero Melchor**, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 25.039.239, comparece en calidad de **compañera permanente del señor Armando Sánchez**, situación acreditada mediante la declaración extraproceso N° 4509.²⁰
- El señor **Carlos Andrés Sánchez Guerrero**, identificado con cédula de ciudadanía 10.034.690, en calidad de **hijo** de la víctima directa, situación acreditada con el registro civil de nacimiento con indicativo serial N°5273217²¹.
- La menor **María Camila Sánchez Obando**, identificada con Tarjeta de Identidad N° 1.088.832.226, en calidad de **nieta**, representada por el señor Carlos Andrés Sánchez Guerrero, acreditada con el registro civil de nacimiento con indicativo serial N° 41962701.
- La señora **Luz Nancy Guerrero Melchor**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 25.038.514, en calidad de **cuñada** del señor Armando Sánchez, hermana de la señora María Leticia Guerrero Melchor, situación acreditada con el registro civil de nacimiento con indicativo serial N°13848712.
- La señora **Valentina Guerrero Melchor**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.090.332.695, en calidad de **sobrina** política del señor Armando Sánchez, hija de Libia Guerrero Melchor, situación acreditada con el registro civil de nacimiento con indicativo serial N° 26112413.

Teniendo en cuenta lo anterior, claramente se puede colegir que el grupo familiar que represento, está completamente legitimado para actuar en calidad de demandantes dentro del presente proceso, toda vez que, se satisfacen los criterios jurisprudenciales establecidos por el H. Consejo de Estado, en los cuales se ha señalado que:

“[...] Cuando se expide un certificado de registro civil de nacimiento y en él consten los nombres de los progenitores del inscrito, dicho documento constituirá prueba suficiente para acreditar el parentesco de consanguinidad existente entre éste y aquéllos y no puede el juez exigir pruebas adicionales para establecerlo, teniendo en cuenta la solemnidad prevista por la ley. [...]”²²

¹⁹ Ver prueba 2. Registros Civiles de Nacimiento

²⁰ Ver prueba 13. Decl extrajudicial compañeros permanentes

²¹ Ver prueba 2. Registros Civiles de Nacimiento

²² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección C, Consejera Ponente Olga Mélida Valle de la Hoz; sentencia del 29 de febrero de 2012, radicación 27001-23-31-000-1999-00684-01 (20858)



1.2. Demandadas - Legitimación en la causa por pasiva:

1.2.1. La Nación²³ - Ministerio de Defensa Nacional

La persona jurídica “**Nación**” está representada por diversos funcionarios de las distintas ramas del poder público que despliegan las tradicionales funciones públicas legislativa, administrativa y jurisdiccional y de los órganos autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado²⁴.

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, la Ley 489 de 1998²⁵, la Ley 790 de 2002²⁶ y demás normas concordantes, la Presidencia de la República, los Departamentos Administrativos y los Ministerios son los organismos principales de la Administración Pública Nacional y hacen parte del sector central de la Rama Ejecutiva del Poder Público.

Los Ministerios tienen como objetivos primordiales la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Administrativo que dirigen. Así las cosas, el Ministerio de Defensa, es el organismo del Gobierno Nacional encargado de contribuir a la gobernabilidad democrática, la prosperidad colectiva y la erradicación de la violencia mediante el ejercicio de la seguridad y defensa, la aplicación adecuada y focalizada de la fuerza y el desarrollo de capacidades mínimas disuasivas²⁷.

Ahora bien, el **día 18 de marzo de 2022, se suscitó en la ciudad de Pereira una rueda de prensa convocada, entre otros, por el Ministerio de Defensa**, la Policía Metropolitana de Pereira y la Alcaldía de Pereira, en la cual se llevó a cabo la demolición de un supuesto “mito de inseguridad”, en relación con el inmueble ubicado en la Calle 11 # 5 – 16, porque presuntamente allí se llevaban a cabo actividades de venta y consumo de estupefacientes, siendo presentada la vivienda como un lugar de expendio y consumo frecuentado por habitantes de calle.

Sin embargo, la anterior información en ningún momento fue verificada o constatada por el Ministerio de Defensa, lo que generó que imprudentemente, el ministro de la época el Dr. Diego Molano haciendo presencia en la ciudad de Pereira afirmara que en el bien inmueble se llevaban a cabo actividades de consumo y distribución de estupefacientes, generando inseguridad en el sector y zozobra en la comunidad, lo cual **resultó ser un montaje por información falsa**, pues el inmueble efectivamente, si sería demolido pero no por las razones expuestas, sino en virtud de un proceso administrativo adelantado por la Inspección 15 de Policía de Pereira donde se ordenó una medida correctiva, pues el bien amenazaba ruina, sin que en ningún momento allí se haya hecho referencia a actividades ilícitas como las enrostradas por el Ministerio.

²³ La persona jurídica “*Nación*” está representada por diversos funcionarios de las distintas ramas del poder público que despliegan las tradicionales funciones públicas legislativa, administrativa y jurisdiccional y de los órganos autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Al respecto puede consultarse la sentencia de septiembre 4 de 1997, Radicación número: 10285, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido sentencia de 7 de diciembre de 2004, Ref. 14.676 (0491), Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández Enríquez.

²⁴ Al respecto puede consultarse la sentencia de septiembre 4 de 1997, Radicación número: 10285, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido sentencia de 7 de diciembre de 2004, Ref. 14.676 (0491), Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández Enríquez.

²⁵ “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.”

²⁶ “Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades Extraordinarias al Presidente de la República”.

²⁷ Decreto 1512 de 2000



Así entonces, se convoca al Ministerio de Defensa debido a su injerencia en la falsa información suministrada a través de medios de comunicación nacionales y regionales a la comunidad en general, al señalar que el bien a demoler era un lugar de expendio y consumo de estupefacientes que revestía peligro para la comunidad del sector, con la única motivación de mostrar un resultado positivo para su gestión administrativa en cabeza del señor Ministro, generando una esfera de falsa seguridad en la comunidad y causando perjuicios al grupo familiar demandante, quienes por más de 40 años fueron vecinos del sector, reconocidos por ser ciudadanos ejemplares, lo que trajo muchos inconvenientes y señalamientos debido a la falsa información difundida.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que la representación de la Nación radica en el Ministro del ramo o en sus delegados, de tal manera que, en asuntos de defensa y seguridad nacional, aquella se radica en el **Ministro de la Defensa, Dr. Iván Velásquez Gómez**²⁸ o quien haga sus veces al momento de la citación pues, al carecer de personería jurídica. Al respecto el artículo 159 de la Ley 1437 de 2011 dispone:

“[...]Capacidad y representación. Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.

“La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho [...]”.

1.2.2. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.

Conforme a lo dispuesto en artículo 3 del Decreto 1512 de 2000²⁹, por el cual se modificó la estructura del Ministerio de Defensa Nacional, se tiene que en este radica la dirección de la Policía Nacional, por ende, se encuentra debidamente legitimado para comparecer a la integración del contradictorio en el asunto en cuestión.

Además, porque el artículo 6 *ibídem* dispuso que la Policía Nacional y las Fuerzas Militares (Fuerza Aérea, Ejército Nacional y Armada Nacional) hacen parte de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, cuya dirección como se dijo previamente y en los términos del artículo 2 *ibídem*, está a cargo del Ministro de Defensa³⁰, de ahí que sea él jefe de la cartera gubernamental quien ostente la atribución legal de representar judicialmente a la Fuerza Pública, obrando en nombre y representación de la Nación.

²⁸ Nombrado por el Decreto 1666 del 7 de agosto de 2022.

²⁹ “Artículo 3°. Dirección de la Fuerza Pública. El Presidente de la República, de acuerdo con el numeral 3° del artículo 189 de la Constitución Nacional, es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República y como tal dirige la Fuerza Pública y dispone de ella, directamente o por conducto del Ministro de Defensa Nacional”.

³⁰ Artículo 2°. Dirección. La Dirección del Ministerio de Defensa Nacional está a cargo del Ministro, quien la ejerce con la inmediata colaboración del Comandante General de las Fuerzas Militares, los Comandantes de Fuerza, el Director General de la Policía Nacional y el Viceministro.



De conformidad con el artículo 218 Constitucional, Ley 62 de 1993 y demás normas vigentes, la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la Nación y más específicamente del Ministerio de Defensa Nacional, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de la convivencia como condición necesaria para el ejercicio de los derechos y libertad públicas y para asegurar que los habitantes del país convivan en paz.

Ahora bien, en relación con los hechos concretos la **POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA - RISARALDA –MEPER-**, tiene a su cargo el deber de control de la convivencia y seguridad ciudadana en el sector en el que ocurrieron los hechos objeto de la presente solicitud, pues la vivienda se encontraba dentro de su jurisdicción, por tanto, le compete interferir, hasta donde la ley lo permite, con el fin de restablecer el ejercicio de los derechos y libertades públicas con observancia de los derechos convencional y constitucionalmente protegidos de la ciudadanía.

Frente al **inmueble ubicado en la calle 11 # 5 – 16 de la ciudad de Pereira**, la Inspección Municipal de Policía No. 15 adelantaba un **proceso policivo** de carácter verbal abreviado, regulado en la ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el que buscaba la aplicación de una medida correctiva de demolición, contenida en el artículo 194 de la ley 1801 de 2016, la cual fue ordenada por el despacho policivo el día 27 de septiembre de 2021 en audiencia pública, señalando que **el inmueble amenazaba ruina**.

Aprovechando lo anterior, el Capitán de la Policía Julián Botero contactó al señor Inspector Nro. 15 de la ciudad de Pereira, para indagarle si sobre el inmueble ubicado en la Calle 11 # 5 – 16 de la ciudad de Pereira había orden de demolición, frente a lo que el inspector responde que sí. El Capitán manifestó que era un foco de inseguridad y que enviaría investigadores al lugar, posteriormente le fueron remitidas al inspector un material video gráfico, en el que se observan los “presuntos” consumidores, indicándole que el inmueble era destinado para el consumo de estupefacientes³¹.

Aprovechando esta situación y contrariando sus deberes constitucionales y legales y, la Policía Metropolitana de Pereira, desfiguró de manera irregular la realidad de los hechos, pues sin fundamento alguno, para el día 18 de marzo de 2022, el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, citó en conjunto con el Ministerio de Defensa y el entonces Alcalde de Pereira, a una rueda de prensa con la presencia de medios de comunicación locales y nacionales donde manifestaron que según **información recolectada por la Seccional de Investigación Judicial – SIJIN** – el lugar era un sitio de expendio y consumo de sustancias estupefacientes frecuentado por habitantes de calle.

Es importante señalar como antecedente que **fueron miembros de la Policía Nacional**, los que aprovechando que sobre el bien inmueble pesaba una medida correctiva de demolición por amenaza de ruina, en una palmaria necesidad de mostrar un resultado positivo ante los altos mandos y el Ministro de la Defensa Nacional, destinaron sus esfuerzos a **construir una versión falsa y amañada de**

³¹ Ver prueba 21. Cuaderno 3. expediente penal militar. Páginas 87 a la 106



los hechos, para ello, engañaron al señor Armando Sánchez, aquí demandante, para ingresar a la vivienda bajo el argumento que iban a realizar una inspección, a lo que el adulto mayor accedió confiando plenamente en la investidura de los policiales y de los cuales presumió su buena fe. Sin embargo, armando un falso teatro, dichos policías ofrecieron dinero a algunos habitantes de calle para que ingresaran al inmueble y permitieran tomar unas imágenes de video en una aparente escena de consumo de estupefacientes, imágenes que fueron publicadas en medios de comunicación por parte de la Policía Nacional, con el fin de acreditar la escena orquestada por los miembros de la fuerza pública. **Lo anterior de conformidad con la información recaudada en la investigación adelantada por el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar³².**

El señor Coronel Aníbal Villamizar, Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira para la época de los hechos, asistió en compañía del Ministro de Defensa y el señor Alcalde Municipal de Pereira, a la rueda de prensa convocada para el día 18 de marzo de 2022 en la que fue difundida información falsa ante diferentes medios de comunicación sobre la demolición del bien inmueble por ser un foco de inseguridad en el sector por venta y consumo de estupefacientes.

No pasó mucho tiempo para que múltiples medios de comunicación transmitieran noticias sobre el **“amañado operativo policial”**, el cual fue tildado por los medios de comunicación como una **“mentira fabricada por la Policía Nacional”**, la cual afectó de manera grave la integridad de la víctima directa y su grupo familiar, pues se vio entre dicho el buen nombre y la honra de unos ciudadanos, que siempre han mostrado honorabilidad y probidad en todos los aspectos de su vida, siendo menoscabado por miembros de una institución que se encuentra llamada a proteger los derechos de los ciudadanos y los bienes jurídicamente tutelados.

Como era de esperarse, tan pronto los medios de comunicación informaron de la noticia, **la Policía Nacional procedió con la apertura de la investigación disciplinaria** contra varios miembros de la institución involucrados, la cual hasta la fecha goza del carácter de reservada y que cursa en la inspección general de la Policía Nacional, por otro lado, se conoció que la oficina de control disciplinario interno, el pasado 30 de marzo de 2022, remitió copias al **Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar con el fin de iniciar el respectivo proceso penal que se encuentra en curso.**

En ese sentido, el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar, aperturó la **indagatoria por los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios**, investigación que condujo a la **captura de 6 miembros de la institución**; el **Coronel Carlos Andrés García Suárez**, quien se venía desempeñando para la fecha de su captura como **subcomandante de la Policía en Cúcuta**, los mayores César Alfonso Bohorquez Salcedo (en curso de ascenso al grado de teniente coronel) y Wilmer Delgado Herrera; el Capitán Héctor Julián Botero Sánchez, el Teniente Jarrixon Perante Sánchez y el Subintendente Rutber Vega Ramírez, estos últimos 4 en los mismos cargos que desempeñaban para la fecha de los hechos.

³² Ver prueba 20



Ante lo manifestado, **La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional**, está legitimada para concurrir al proceso y se encuentra representada legalmente por el Ministro de Defensa Nacional, Dr. Iván Velásquez Gómez³³ o quien haga sus veces al momento de la citación.

1.2.3. El Municipio de Pereira

La Ley 1551 de 2021 delimita la normativa relacionada con el régimen municipal, dentro de la autonomía que reconoce a los municipios la Constitución y la ley, como instrumento de gestión para cumplir sus competencias y funciones, en su tenor consagra:

“Artículo 4º. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia.

Los municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:

a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la de otras entidades estatales de diferentes niveles.

b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.

Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden nacional no son excluyentes, sino que coexisten y son dependientes entre sí para alcanzar el fin estatal.”

Ahora bien, los municipios como entidades territoriales tienen autonomía en la gestión de sus asuntos e intereses tal y como lo dispone el artículo 287 Constitucional; bajo dichos preceptos, tienen derecho a gobernarse por autoridades propias, las cuales podrán ejercer las competencias que les corresponden.

En este orden, los municipios a través de las Secretarías de Gobierno o quien haga sus veces, tienen a su cargo la preservación del orden público en jurisdicción y territorio esto en apoyo y co-equipo con los demás entes existentes en su jurisdicción.

Mediante la Ley 4ª. de 1991³⁴, se dictaron normas sobre orden público interno, policía cívica local y otras disposiciones. El artículo 9º *Ibídem*, estableció que, para efectos de la conservación del orden público, las órdenes y decretos del alcalde en materia de policía, serán de aplicación preferente a las disposiciones y medidas que adopten los inspectores y demás autoridades de policía y de su jurisdicción.

³³ Nombrado por el Decreto 1666 del 7 de agosto de 2022.

³⁴ por la cual se dictan normas sobre orden público interno, policía cívica local y se dictan otras disposiciones”.



En suma, el artículo 10 de la Norma a la que se viene haciendo alusión, dispuso que el alcalde como jefe de policía es el responsable de la preservación y mantenimiento del orden público en el municipio.

Para el cumplimiento de lo anterior, el artículo 11 de la Ley 4ª. de 1991, estableció que la Policía Nacional, en el municipio, estará operativamente a disposición del alcalde, quien dará sus órdenes por intermedio del respectivo comandante de policía, o de quien haga sus veces. Dichas órdenes son de carácter obligatorio.

En concordancia con lo expuesto en precedencia, la Ley 136 de 1994³⁵, en su artículo 91, consagró dentro de las funciones de los alcaldes, las siguientes:

"Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo.

Además de las funciones anteriores, los alcaldes, tendrán las siguientes:

...

b) **En relación con el orden público:**

e. **Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, conforme al Artículo 9 del Decreto 1355 de 1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen. [...]**. (se destaca)

Frente al caso concreto, se tiene que la alcaldía del municipio de Pereira vulneró los derechos a la honra y al buen nombre del núcleo familiar del señor Armando Sánchez, ya que por noticias publicadas en diversos medios de comunicación y redes sociales, se difundió la información falsa que la demolición que realizaron la administración municipal y la Policía Nacional sobre su inmueble fue producto de una actuación policial de lucha contra el Microtráfico en el marco del "PLAN 1.000 CONTRA EL MICROTRÁFICO", estrategia usada contra los expendios de drogas ilícitas en los barrios, los entornos escolares, los parques y el plano virtual.

Sin embargo, para la fecha de los hechos, sobre el bien inmueble pesaba una orden de medida correctiva de demolición por amenaza de ruina, la cual fue impuesta por parte de la Inspección 15 de Policía de la ciudad de Pereira, la cual debía ser ejecutada por esta, con apoyo de las entidades correspondientes para tal fin; sin embargo, el Municipio de Pereira, en compañía de la Policía Nacional, en lugar de ejecutar la medida como en derecho corresponde, exhibieron el bien inmueble como un lugar de expendio y consumo de sustancias estupefacientes, con la única motivación de mostrar resultados positivos ante la comunidad y el gobierno nacional.

El señor Carlos Alberto Maya López, Alcalde municipal para la época de los hechos, asistió en compañía del Ministro de Defensa y diferentes mandos de la Policía Nacional, a la rueda de prensa convocada para el día 18 de marzo de 2022 en la que fue difundida información falsa sobre el bien inmueble ante diferentes medios de comunicación, así mismo agradeció al Ministro de Defensa el presunto resultado positivo con la demolición del inmueble frente a un mito de inseguridad, siendo participe del teatro articulado montado por las demás entidades con la que se brindó información falsa a la comunidad donde se estigmatizó el inmueble como lugar de expendio y consumo de estupefacientes.

³⁵ Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios"



Analizando detalladamente los videos, declaraciones y publicaciones en internet, medios de publicación y redes sociales, queda claro que el actuar de la Alcaldía Municipal de Pereira a través de su alcalde municipal, dio certeza de lo manifestado por el entonces Ministro de la Defensa y la Policía Nacional.

Prueba de ello es que, a la rueda de prensa convocada asistió el entonces alcalde señor Carlos Maya López, quien intervino en la programación y en el orden del día del programa irregularmente creado donde fue difundida la falsa información, siendo presentado el inmueble como lugar de alta peligrosidad de expendio y consumo de estupefacientes, **participando del falso escenario creado por varias entidades para presentar resultados** y donde, efectivamente el inmueble fue demolido y presentado falsamente como el gran trofeo contra la delincuencia por el expendio y consumo de estupefacientes.

En virtud de lo anterior, el señor Alcalde de Pereira de manera contundente, afirmó en rueda de prensa ante medios de comunicación regionales y nacionales que el inmueble fue demolido en virtud de una actuación policial producto del “PLAN 1000 ACTIVIDADES CONTRA EL MICROTRÁFICO”, cuando por parte de la Inspección 15 de Policía y su Secretaría de Gobierno se había dado la orden de derribamiento del inmueble por representar amenaza de ruina, en aplicación estricta de la ley 1801 de 2016.

Conforme a las respuestas de las diferentes entidades vinculadas al “PLAN 1000 ACTIVIDADES CONTRA EL MICROTRÁFICO”, se evidenció que nada tiene que ver el inmueble en discusión con actuaciones delictivas, como lo afirmó la Dirección Seccional de Fiscalía de Risaralda,³⁶ indicando que no existe en ninguno de sus registros información que vincule a la señora Teresa Sánchez Jaramillo (q.e.p.d), al señor Armando Sánchez, ni a Carlos Andrés Sánchez Guerrero, como indiciados en algún delito; así mismo lo manifestó el señor Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira³⁷, al señalar en la respuesta al mencionado derecho de petición:

2.3. Sirvase indicar cuál era la supuesta actividad delictiva que se estaba desarrollando en el inmueble ubicado en la calle 11 #5-16 del barrio La Libertad de Pereira - Risaralda, la cual dio lugar a la investigación penal que originó las afirmaciones realizadas por la Policía Metropolitana de Pereira en el comunicado de prensa que expidió a la opinión pública previo a la audiencia pública a la que concurrió el señor Ministro de Defensa, y cuáles fueron los elementos materiales probatorios que dieron sustento a dicha investigación.

R/ Con ocasión al presente punto, en su momento la Jefatura de la Seccional de Investigación Criminal Pereira, fue la encargada de recopilar información de inteligencia y de fuentes humanas, que indicaban, que dicho inmueble era utilizado para el consumo de sustancias estupefacientes y que habría generado diferentes manifestaciones de inseguridad en el sector, aclarando que, sobre esta vivienda no se adelantaba ninguna investigación de carácter penal, sino, que el motivo principal del procedimiento se cimentaba en la amenaza de ruina y orden de demolición expedida por la Administración Municipal.

En el caso sub examine se puede determinar que si bien el Municipio de Pereira, como primera autoridad en materia policial, tenía la potestad de realizar actividades en contra del microtráfico de estupefacientes como parte del cumplimiento a las políticas de Seguridad y Convivencia Ciudadana, esta entidad incurrió en una falla

³⁶ Ver prueba 9 derecho de petición fiscalía

³⁷ Ver prueba 10 derecho de petición meper



al no proveer información veraz e imparcial pues no cumplió con un deber de diligencia razonable para constatar la veracidad de la información reportada, esto es, que la vivienda propiedad de la señora Teresa Sánchez Jaramillo (q.e.p.d) no fue demolida como parte del “PLAN 1.000 ACTIVIDADES CONTRA EL MICROTRÁFICO”, sino como causa de una actuación administrativa, toda vez que el inmueble amenazaba ruina o derrumbe. Entonces, es posible afirmar que se indujo a las personas de la comunidad a considerar que en el inmueble referenciado se llevaban a cabo acciones ilícitas como la venta de estupefacientes; más si se tiene en cuenta el impacto negativo que dicha información tuvo sobre la población y la manera como fue divulgada a la ciudadanía, haciendo ver que el inmueble era utilizado como un centro de distribución y consumo de estupefacientes; y por ende colocando entredicho la honorabilidad y buen nombre de sus propietarios.

El artículo 21 C.P. dispone la garantía del derecho a la honra y delega en la ley la forma en que el mismo sea protegido. Usualmente, este derecho tiene una conexión material, en razón de su interdependencia, con la garantía prevista en el inciso primero del artículo 15 C.P., precepto que estipula el derecho de todas las personas a su intimidad personal y familiar, y a su buen nombre, imponiéndose al Estado el deber correlativo de respetar y hacer respetar estos derechos.

A estas previsiones debe agregarse lo previsto en el artículo 2º C.P., cuyo inciso segundo replica la previsión propia del constitucionalismo liberal clásico, la cual determina que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, creencias y demás derechos y libertades.

Una fórmula análoga de la garantía constitucional en comento está consignada en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma integrante del bloque de constitucionalidad, cuando establece que (i) toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad; (ii) nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación; y (iii) toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. De manera similar el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, previsión que también tiene naturaleza constitucional, dispone que (i) nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación; (ii) toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

De conformidad con estas previsiones constitucionales y del derecho internacional, se encuentra que el derecho a la honra está vinculado con la protección de la intimidad y la dignidad. Su contenido se define, entonces, en la protección de la imagen del individuo, la cual debe corresponder a la que se deriva de sus propios actos, así como de la salvaguarda de aquella información que, al pertenecer al fuero íntimo de las personas, no está llamada a ser comunicada a terceros, sin con ello inferir una grave e injustificada intervención en la autonomía y dignidad del sujeto concernido.

Como se observa, las normas internacionales insisten en el deber estatal de salvaguardar al individuo de injerencias indebidas en su vida privada o en ataques



a su honra, comprendida como la relación de correspondencia antes mencionada. Existen, en ese orden de ideas, dos vertientes principales de protección del derecho a la honra: de un lado, la protección de la propia imagen, la cual debe cumplir con una condición de veracidad entre la información que se predica del sujeto y sus reales condiciones, cualidades y comportamientos. De otro lado, se protege aquella información que, al margen de su veracidad, refiere a datos personales íntimos, los cuales no están llamados a ser conocidos por terceros. Por ende, el objeto jurídico protegido en este caso es la intromisión injustificada, bien sea de particulares o del mismo Estado, respecto de dicha información personal excluida de circulación.

Discurrido lo anterior, en el caso que ahora nos cita, se considera que el Municipio de Pereira – Risaralda, está legitimado en la causa toda vez que el actuar omisivo de la administración municipal al convalidar la falsa información brindada en rueda de prensa realizada en forma conjunta con la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa propició la generación del daño antijurídico que se alega, esto debido a que tal y como lo indica la normatividad vigente, al momento de ejercer sus competencias y sus responsabilidades, debió el Municipio en cabeza de su Alcalde revisar la realidad en relación al tema de la demolición de la vivienda, no asumir una actitud pasiva al guardar silencio y ser permisivo como efectivamente lo hizo.

Importante indicar que fue solo hasta cuando en medios de comunicación salió a la luz la verdad de los hechos sobre la falsa información difundida, cuando el entonces Alcalde de Pereira pidió excusas y solicitó la remoción del cargo del comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, cuando ya el daño se encontraba configurado, evidenciándose con ello la omisión en el cumplimiento de sus funciones pues las excusas rendidas por el burgomaestre sólo convalidan la falta cometida.

El municipio de Pereira, está representado por el señor Alcalde Mauricio Salazar Peláez o quien haga sus veces al momento de la comparecencia a la correspondiente audiencia de conciliación.

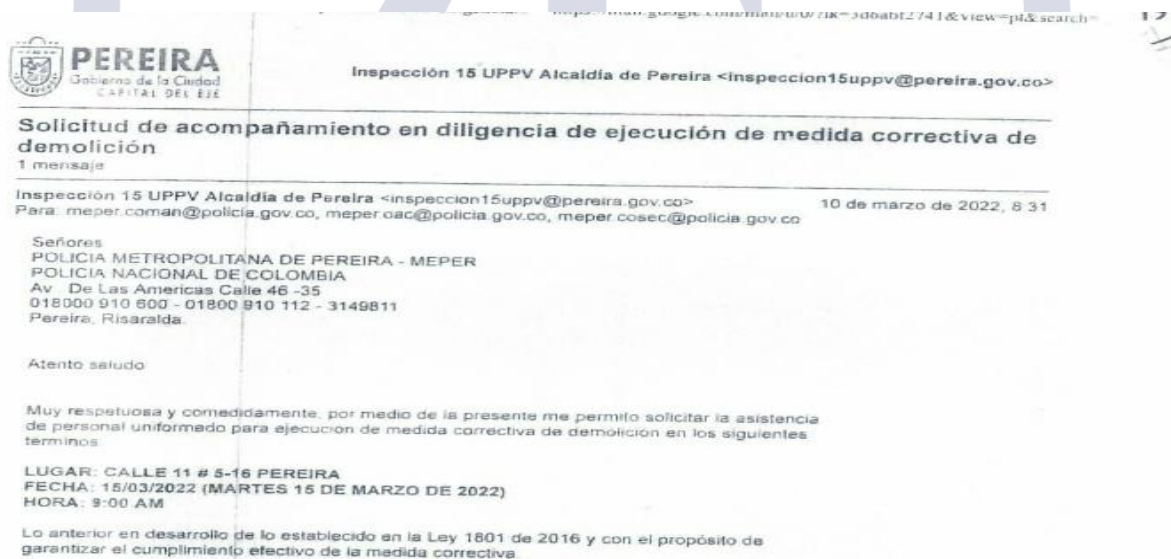
2. Fundamentos fácticos.

- 2.1.** Por parte del **Inspector de Policía 15 Municipal de la ciudad de Pereira**, fue adelantado **proceso verbal abreviado**, donde se dispuso como medida correctiva la demolición del inmueble ubicado en la calle 11 No 5-16 de la ciudad de Pereira, disposición soportada en el proceso administrativo de carácter policivo por **“amenaza de ruina”**. La vivienda era habitada por los señores Armando Sánchez y Teresa Sánchez Jaramillo, residentes por más de 40 años.
- 2.2.** Por medio del Acta 2021-231/R-15-2021-361 correspondiente a la Audiencia Pública adelantada en el proceso verbal abreviado con radicado 153-2021233 por demolición de inmueble por amenaza de ruina, consideró el Inspector de Policía que la situación en que se encontraba el inmueble ubicado en la calle 11 #5-16 de Pereira-Risaralda, estaba demostrada, por tanto, mediante decisión administrativa dispuso lo siguiente:



IMPONER la medida correctiva de **DEMOLICIÓN**, bajo las siguientes condiciones:
ORDENAR el **DESALOJO** de la ciudadana **TERESA SANCHEZ JARAMILLO**, quien se identifica con: CC Nro: 24.891.8.45, dentro de los cinco (5) días siguientes a la presente decisión. El cumplimiento de la medida se verificará y en caso de no haberse cumplido en el plazo establecido, **se** obligará a cumplirla a través. si es necesario, de los medios medidas y procedimientos establecidos en la Ley 1801 de 2016. incluyendo el uso de la fuerza por parte del personal uniformado de la Policía Nacional
INFORMAR al señor **ARMANDO SANCHEZ**, quien se identifica con C.C N°: 10.060.255, que una vez hecho efectivo el desalojo, será él en su condición de hijo y estando obligado legalmente, quien deberá asumir la responsabilidad para con la señora **TERESA SANCHEZ JARAMILLO** quien se identifica con. CC Nro. 24.891.8.45, en cuanto a vivienda y dando unas condiciones mínimas de vida digna Máxime, cuando se rechazaron las alternativas brindadas por la administración. (Sin perjuicio de que se realicen. por parte de los ciudadanos, los trámites necesarios para acceder a aquellas alternativas ya mencionadas).

- 2.3. La inspección de Policía que adelantaba la actuación administrativa, solicitó el acompañamiento a la Policía Metropolitana de Pereira para la ejecución de la medida correctiva, actividad que se desarrollaría el día **15 de marzo de 2022 a las 09:00 horas** en la dirección calle 11 N° 5-16 de la ciudad de Pereira- Risaralda.



El Capitán Julián Botero contactó al señor Inspector Nro. 15 de la ciudad de Pereira, para indagarle si sobre el inmueble ubicado en la Calle 11 # 5 – 16 de la ciudad de Pereira había orden de demolición, a lo que el inspector comenta que sí. El Capitán le manifestó que el inmueble era un foco de inseguridad y que enviaría investigadores al lugar, posteriormente le fueron remitidas al inspector un material video gráfico, en el que se observan los “presuntos” consumidores y que el inmueble era destinado para la venta y consumo de estupefacientes³⁸.

- 2.4. La medida correctiva impuesta, no fue ejecuta en la fecha y hora fijada y tampoco se tuvo noticia de lo ocurrido entre el 15 de marzo y el 17 de marzo de ese año, sin embargo, inexplicablemente, **el Ministerio de Defensa, La**

³⁸ Ver prueba 21. Cuaderno 3 expediente penal militar. Páginas 87 a la 106



Policía Metropolitana de Pereira y la Alcaldía de Pereira convocaron a rueda de prensa a los medios de comunicación para que se hicieran presentes el día 18 de marzo del 2022, en el bien inmueble ubicado en la calle 11 #5-16 del barrio La Libertad de Pereira, hecho que fue denominado como **“derribamiento de un mito de inseguridad que afectaba a la comunidad del barrio La libertad en la ciudad de Pereira.”**³⁹

- 2.5. A dicho evento, concurren entre otros, el entonces señor Ministro de Defensa Dr. Diego Molano Aponte, el entonces Alcalde de Pereira señor Carlos Alberto Maya López y el Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira; el señor Coronel Aníbal Villamizar y varios integrantes de la Policía Nacional.
- 2.6. El Ministro de Defensa en la rueda de prensa afirmó ante los medios de comunicación que esta vivienda era un sitio de expendio y consumo de estupefacientes frecuentado por habitantes de calle que generaba inseguridad en el sector y que el inmueble era una “guarida para atracadores”. Así mismo, reconoció públicamente que el bien inmueble era propiedad del señor Armando Sánchez quien lo había perdido por las actuaciones delictivas que en la vivienda se presentaban y que ese día el mencionado adulto mayor recuperaba su inmueble⁴⁰.

En esa misma rueda de prensa, el entonces Alcalde Municipal de Pereira, el señor Carlos Alberto Maya, agradeció al Ministro de la Defensa y a la Policía Nacional la recuperación del inmueble, así mismo, aseguró que en la vivienda se llevaban a cabo actividades de comercialización y distribución de estupefacientes y exaltó el derrivamiento del bien inmueble como una medida ejemplarizante, aún cuando la Alcaldía de Pereira conocía que sobre este bien inmueble pesaba una medida policiva correctiva por el posible colapso de la vivienda, situación sustancialmente diferente a la que fue manifestada y en la que se hacía referencia a conductas delictivas por comercialización y consumo de estupefacientes.

³⁹ Ver prueba 14. Citación rueda de prensa

⁴⁰ Ver prueba 15. Video rueda de prensa

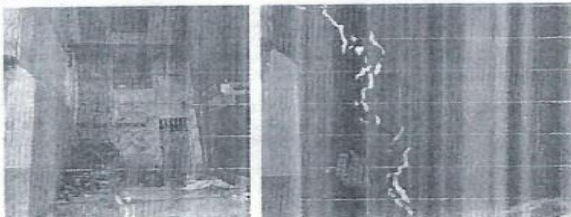


- Al inicio de la intervención el señor Ministro hace referencia al "señor Armando Sánchez propietario del inmueble, quien lo había perdido hace muchos años y hoy lo recupera...", igualmente menciona al Presidente de la Junta de Acción Comunal y a una vecina del sector que venía siendo afectada.
- Seguido de un contexto sobre la inducción al consumo que hacen las organizaciones criminales, la vinculación y evolución de un joven en temas delictivos, el deterioro y crisis familiar derivado del consumo; el señor Ministro referencia que por eso "es tan importante combatir el microtráfico en la ciudad y derribar cada una de estas ollas, cada vez que se derriba un muro de un sitio como estos, que se había convertido en una guarida de atracadores, en un sitio de consumo, se generan zonas de miedo. Yo estoy seguro que en la noche nadie quería pasar por acá..."
- Hace relación a "yo estoy seguro que a los adultos mayores les da miedo, los papás del que tenía que cruzar acá el barrio La Libertad le daba miedo, los vecinos, como nos contaba el Presidente de la Junta de acción Comunal del barrio Bavaria les daba miedo, para poder saber qué se hace o qué pasaba debajo de este puente, porque comienza a deteriorarse el entorno urbano, se convierten en zonas de miedo, entonces la instrucción del Presidente es recuperar estas zonas..."
- Expresa igualmente que "...derribar estos muros de miedo, para que más bien crezcan esfuerzos de esperanza, derribar estas guaridas de atracadores para que más bien retorne la seguridad, la policía, el CAI, un frente de seguridad...", "...derribar cada uno de estos muros es volver a crear esperanza para los jóvenes..."
- Posteriormente hace referencia a una inversión que se haría por parte del INVIAS en materia de infraestructura y recuperación de los puentes que están cerca del lugar y que resultaron tan afectados por el vandalismo y los bloqueos en el año anterior, según se lo contó el Presidente de la Junta de Acción Comunal.
- Finalmente y seguido de las palabras del señor Ministro de Defensa, se hace entrega de dos (2) motocicletas que fueron recuperadas en la ciudad de Pereira, una de ellas hurtada en el departamento de Antioquia y la otra en la ciudad, pero en un lugar diferente al sitio de la demolición.



Antecedentes de consumo y delincuenciales en el entorno del inmueble

El sitio venía siendo utilizado para el consumo de estupefacientes, lo cual se pudo evidenciar en las verificaciones previas realizadas, donde el entorno se constituía en un foco de inseguridad para la comunidad, destacando que a pocos metros del lugar se encuentra ubicado el puente del Viaducto César Gaviria Trujillo.



Página 2 de 4

- 2.7. La vivienda antes mencionada fue demolida en presencia del Ministro de Defensa, el entonces Alcalde de Pereira y varios integrantes de la Policía Nacional, así como de los medios de comunicación convocados, siendo sellada para evitar el ingreso de habitantes de calle y mostrada como un parte de victoria ante la delincuencia por expendio y consumo de estupefacientes.
- 2.8. A raíz de las afirmaciones realizadas por el señor Ministro de la Defensa Nacional y el Alcalde de la ciudad de Pereira, los integrantes de la familia que habitaba en dicho inmueble, recibieron amenazas⁴¹ contra su vida por parte de grupos al margen de la ley, quienes manifestaron que se estaba realizando un expendio de drogas "sin su autorización", pues es bien sabido del manejo de negocios de microtráfico por parte de esta clase de grupos.
- 2.9. Días después de la demolición del inmueble, salió a la luz pública a través de medios de comunicación, que lo ocurrido se trataba de un "montaje" orquestado por las entidades demandadas y que en el inmueble no se realizaban las actividades divulgadas en la rueda de prensa convocada.
- 2.10. Con base en esas revelaciones públicas, la **Oficina de Control Disciplinario** de la Policía Metropolitana de Pereira, de oficio, aperturó una indagación preliminar, bajo el radicado SIED2D EE-MEPER-2022-65, la cual fue remitida por competencia a la Inspección General de la Policía Nacional de Bogotá⁴².
- 2.11. Al mismo tiempo, se inició la investigación de carácter penal por los mencionados hechos, la cual se encuentra a cargo del Juzgado 167 Penal Militar de la ciudad de Pereira.

⁴¹ Ver prueba 22. Expediente penal amenazas.

⁴² Ver prueba 10. Derecho de petición MEPER



Allí se citaron a diligencias de versión libre, entre ellas la del **Mayor de la Policía Wilmar Delgado Herrera**⁴³ las cuales reposan en su totalidad en el expediente penal militar, donde se evidencia como desde la primera esfera de mando de la Policía de Pereira se dio la orden de encontrar un bien para demoler que cumpliera con los requisitos para el plan “1.000 actividades contra el microtráfico”

DILIGENCIA DE VERSIÓN LIBRE QUE RINDE EL SEÑOR MAYOR WILMAR DELGADO HERRERA, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 81.717.251 EXPEDIDA EN BOGOTÁ.D.C. (CUNDINAMARCA)

la defensa, por lo cual era necesario que se realizaran las coordinaciones y gestiones para presentar la demolición de un inmueble en desarrollo del plan mil actividades contra el microtráfico, esto se dio en desarrollo del discurso para el cierre de la relación general momentos después de que él hubiese recibido una llamada telefónica, como tal la orden fue impartida a mi Teniente Coronel jefe de región y ella a su vez la impartió a los jefes de seccional que nos encontrábamos en esa relación general, acto seguido se ordeno por parte del suscrito al capitán BOTERO SANCHEZ JULIAN, adelantar las coordinaciones y gestiones para revisar con los diferentes inspectores de policía si había algún inmueble con orden pendiente para ejecutar la actividad de demolición, que obviamente cumpliera con las condiciones o requisitos de mencionado plan mil contra microtráfico, en el transcurso de la noche del

- 2.12. Se evidencia la premura con la que las autoridades de Policía estaban en las búsqueda de un bien inmueble para demoler y poder cumplir con la orden asignada para mostrar resultados positivos.

Por su parte el Municipio de Pereira por intermedio del Inspector 15 de Policía, se encargó de referir el respectivo bien. Así entonces, se empieza a fabricar el operativo con todos los requerimientos de logística y seguridad necesarios. Tenía el Inspector Quince conocimiento pleno de que el bien se pretendía demoler por amenaza inminente de ruina pero no por ser un mito de inseguridad por expendio y consumo de estupefacientes, lo cual declaró el **Mayor Wilmar Delgado Herrera**⁴⁴ en diligencia de version libre, así:

el capitán BOTERO me comunico que luego de haber realizado diferentes llamadas a inspectores de policía el inspector quince de policía le había confirmado que tenía un inmueble con orden de demolición y por tanto le indique que realizara las verificaciones acorde a la lista de chequeo que ya era de conocimiento debido a que en otras oportunidades se había usado para adelantar este tipo de actividades en ocasiones anteriores, con el objetivo de conformar y tener claridad respecto a que el inmueble que tenía la orden de demolición se tratara de un lugar de expendio o consumo de estupefacientes y como tal un foco de inseguridad, el día miércoles 16 de marzo de 2022 hacia

- 2.13. Una vez ubicado el inmueble, la Policía Nacional, despliega todo su potencial operativo para crear el montaje que serviría de base al falso positivo. En diligencia de versión libre rendida por la **Subteniente Luisa Maria Mora Rincon**⁴⁵, se puede establecer como el señor Armando Sánchez y Carlos Andrés Sánchez, hijo y nieto de la propietaria del inmueble (Sra Teresa

⁴³ Ver Prueba 20 Cuaderno 2 folio 167

⁴⁴ Ver Prueba 20 Cuaderno 2 folio 167

⁴⁵ Ver Prueba 20 Cuaderno 2 folio 181



Sánchez Jaramillo), prestan ayuda y colaboración a la Policía permitiendo el ingreso de la autoridad pública al inmueble que se encontraba deshabitado, **en aras de lo que creían era una colaboración frente al procedimiento normal para adelantar la demolición por amenaza de ruina.** Al respecto se lee:

todo, se acercan dos investigadores no se quienes son no tengo los nombres y llega el supuesto dueño, y el supuesto nieto hijo del señor, los investigadores me preguntan que si necesitamos hacer grabaciones de la casa donde yo les mencione que sí y ellos hablan con los supuestos propietarios de la casa y el supuesto hijo del señor fue por la llaves de la casa el mismo abrió la vivienda y ahí es donde se dirige el subintendente DIEGO TORRES de COEST MEPER y realiza las imágenes dentro del inmueble donde no había nadie, termina de realizar las imágenes sale de la vivienda y la misma persona que abrió el inmueble lo cierra y los investigadores me preguntan que si necesitábamos algo más yo les digo que no porque ya teníamos las imágenes dentro del inmueble, ellos se van comenzamos a hacer imágenes en el sector y yo les

- 2.14. De igual manera en la declaración rendida por el **Patrullero David Fernando Hernandez Loaiza**⁴⁶, se evidencia como una vez permitido el ingreso al inmueble y tomadas las fotografías, un Coronel de la Institución le indica que esas imágenes debían cambiarse por ordenes de funcionarios de la DIJIN, y empezaron a grabar videos con personas que simulaban consumir stupefacientes pero que nunca lo hicieron dentro del lugar.

encontraba almorzando y recibo la llamada por parte de mi jefe directa mi TE LUISA MARIA MORA, quien me dice que arranque de manera inmediata al lugar para grabar unas imágenes que tocaba cambiarlas por órdenes de funcionarios de la DIJIN, yo me desplazo y llego al lugar, al llegar al lugar me aborda un señor CORONEL el cual no recuerdo el apellido pero pertenece a la DIJIN quien me manifiesta que las imágenes tocaba cambiarlas porque había en el video que se le había mostrado anteriormente muchas imágenes de policía y que ese video no era para resaltar la labor policial que lo que se necesitaba mostrar era que había un problema y que por eso se intervenía, que si no había problema o que solo se muestra policía no habría necesidad de intervenir, me dijo eso y que había que cambiar todas las imágenes, eso me lo dijo el CORONEL allá en el punto, yo cumplí la orden de iniciar el proceso de grabación. **PREGUNTADO:** Qué tipo de imágenes grabo en ese momento. **RESPONDIO:** Se grabaron imágenes de la vivienda y de personas que simulaban consumir stupefacientes en este lugar, ellos nunca consumieron en el momento, pero simulaban que lo hacían. **PREGUNTADO:** Antes

- 2.15. En la misma declaración se indica como **funcionarios de la SIJIN Y DIJIN llevaron al inmueble habitantes de calle** para que **SIMULARAN** el consumo de stupefacientes dentro de la vivienda, procediendo a configurar el montaje en el afán de presentar resultados positivos ante los altos mandos.

⁴⁶ Ver Prueba 20 Cuaderno 2 folio 298



cumplía las funciones de COEST DIJIN, no sé el nombre de ese MAYOR.
PREGUNTADO: Se encuentra usted en la capacidad de identificar a esa persona que refiere como el MAYOR integrante de COEST DIJIN. **RESPONDIO:** Si, él era de tez blanca, aunque en este momento se me dificulta describirlo, pero viéndolo yo sé quién es. **PREGUNTADO:** cuando usted llega al lugar que funcionarios de los que refirió se encontraban dentro de la vivienda. **RESPONDIO:** Cuando yo llego ellos estaban afuera, la vivienda está cerrada, uno de los funcionarios de la SIJIN que acompañaba al CT BOTERO abre la puerta, al abrir la puerta yo observo una vivienda por dentro en pésimas condiciones y en estado de abandono, solo eso. **PREGUNTADO:** En qué momento son ingresadas a la vivienda las personas que simulaban consumir sustancias para las tomas de video. **RESPONDIO:** Al momento de abrir la vivienda, las personas estaban afuera, eran habitantes de calle, los de la SIJIN y DIJIN que se encontraban en el lugar les dijeron a las personas que siguieran. **PREGUNTADO:** Que funcionario les dio las indicaciones a estas personas para que simularan el consumo de sustancias mientras usted realizaba las tomas de video. **RESPONDIO:** Mi CT BOTERO, les dice que ingresen y que simulen que se está consumiendo. **PREGUNTADO:** En algún momento usted dio indicaciones a estas personas para que simularan el consumo de sustancias mientras usted realizaba las tomas de video. **RESPONDIO:** Si, de donde se debían de ubicar, hágase aquí, hágase aca, solo de donde debían estar. **PREGUNTADO:** En algún momento estar personas portaron o consumieron sustancias estupefacientes frente a los institucionales que se encontraban en la vivienda. **RESPONDIO:** No señor en ningún momento, fue solamente una simulación de estar fumando. **PREGUNTADO:** Durante la toma de los videos a las personas que estaban simulando el consumo de sustancias dentro del inmueble estuvieron presentes, además del CT BOTERO, los funcionarios de la DIJIN. **RESPONDIO:**

- 2.16.** Para el día 30 de marzo de 2022, una vez dado a conocer el montaje por medios de comunicación, el Alcalde Municipal de Pereira para la época de los hechos, en rueda de prensa ofreció disculpas públicas y condenó las falsas informaciones sobre el inmueble demolido y la afectación a sus propietarios, por lo cual solicitó la investigación y el retiro del comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, pese a que conocía que el inmueble era objeto de un proceso policivo adelantado en su administración por amenaza de ruina pero en ningún momento por hechos delictivos.
- 2.17.** El 2 de abril de 2022 la Dirección Nacional de la Policía Nacional relevó del cargo al Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, al Subcomandante y al Comandante operativo, de igual manera a los Jefes de Investigación Judicial de la Dijin de la regional de Investigación criminal de la región N° 3, al igual que de la seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Pereira y al Jefe de Comunicaciones estratégicas de la Dijin.



Abril 2 de 2022

COMUNICADO

La Dirección General de la Policía Nacional se permite informar:

1. En el marco de las actuaciones disciplinarias que se adelantan tras la demolición de un inmueble del barrio La Libertad de Pereira, el pasado 18 de marzo, como parte de la estrategia contra el microtráfico, se tomó la decisión de relevar del cargo al comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Aníbal Villamizar Serrano; al subcomandante, coronel John Fredy Falla Varón; y al comandante operativo, teniente coronel Dewi Xiomara Jácome González.
2. Así mismo, se relevan de su cargo el coronel Carlos Andrés García Suárez como Jefe de Investigación Judicial de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN); la teniente coronel Ana Gabriela Gutiérrez Naranjo, jefe de la Regional de Investigación Criminal de la Región N.º 3., y el mayor Wilmer Delgado Herrera, jefe de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Pereira. Igualmente, el mayor César Alfonso Bohórquez Salcedo, jefe de Comunicaciones Estratégicas de la DIJIN.
3. Como comandante de la Policía Metropolitana de Pereira fue designado el coronel Javier Raúl Gallego Duque, quien se desempeñaba como comandante del Departamento de Policía Risaralda.
4. Al Comando del Departamento de Policía Risaralda llega en calidad de encargo el teniente coronel Paulo César Cruz Delgadillo, quien estaba a cargo del Subcomando de la misma unidad.

2.18. Producto de la investigación penal **fueron capturados** los señores: **Coronel Carlos Andrés García Suárez**, quien para la fecha de la captura se venía desempeñando como **Subcomandante de la Policía en Cucúta**, los mayores César Alfonso Bohorquez Salcedo (en curso de ascenso al grado de teniente coronel) y Wilmer Delgado Herrera; el Capitán Héctor Julián Botero Sánchez, el Teniente Jarrixon Perante Sánchez y el Subintendente, Rutber Vega Ramírez, **presuntos responsables de los delitos abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios**.

2.19. A la fecha se desconoce el resultado de la investigación disciplinaria, y por el lado del proceso penal, se encuentra en curso y en trámite, posterior a una nulidad procesal que fue decretada por el Tribunal Superior de la Justicia Penal Militar, que dio como resultado que los 6 integrantes capturados recobraran su libertad⁴⁷, sin que a la fecha haya un nuevo pronunciamiento al respecto o de relevancia al proceso.

2.20. En razón a lo anterior el día 8 de marzo de 2024, se radicó ante los Procuradores Judiciales Delegados en Asuntos Administrativos solicitud de Conciliación Extrajudicial.

2.21. La conciliación fue declarada fallida, habida cuenta de la falta de ánimo conciliatorio de las partes.

⁴⁷ Ver prueba. 23 Nulidad proceso penal



3. Fundamentos jurídicos de la solicitud

3.1. De la responsabilidad del Estado

A partir de la expedición de la Constitución Política de 1991 se produjo la “constitucionalización”⁴⁸, de la responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado, dicha cláusula se encuentra consagrada en lo dispuesto en su artículo 90, el cual, establece que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables y que se causen por la acción u omisión de las autoridades públicas o sus agentes.

3.2. De los elementos de la responsabilidad del Estado.

De acuerdo con el artículo 90 constitucional, se distinguen como elementos fundamentales de la responsabilidad del Estado, el daño antijurídico, la imputación y el nexo de causalidad.

3.3. Juicio de la responsabilidad del Estado en el caso concreto

En el presente caso, dichos elementos se configuran así:

3.3.1. De la existencia del daño antijurídico

El primer elemento de responsabilidad, se encuentra configurado por las falsas informaciones que constituyen un verdadero falso positivo y los graves señalamientos realizados en un acto público por el entonces Ministro de Defensa y el Alcalde de la ciudad de Pereira, indicando ante los medios de comunicación regionales y nacionales que la vivienda habitada por la señora Teresa Sánchez Jaramillo (q.e.p.d) y el señor Armando Sánchez, era un lugar de expendio y consumo de estupefacientes frecuentado por habitantes de calle que se había convertido en un foco de inseguridad para el sector, razón por la que se procedería a su demolición como efectivamente sucedió, cuando la información difundida no correspondía a la realidad de los hechos, pues el inmueble sería derribado pero como consecuencia de un procedimiento administrativo adelantado por el Inspector de Policía 15 de la ciudad de Pereira donde se indicó que la vivienda amenazaba de ruina.

Tanto el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Alcaldía de Pereira, aprovecharon que el inmueble debía ser demolido y lo presentaron ante medios de comunicación, como un peligroso lugar de expendio y consumo de sustancias estupefacientes, causando con dichas falsas informaciones graves perjuicios a la señora Teresa Sánchez y su grupo familiar, atentando contra su honra y buen nombre, viéndose señalados, difamados y hasta amenazados por grupos delincuenciales al margen de la Ley quienes les indicaban que en el inmuebles se estaba llevando a cabo venta de estupefacientes sin su autorización, razón por la que la Fiscalía General de la Nación profirió medida de protección en su favor⁴⁹.

⁴⁸ La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado: “El Estado de Derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley, sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”. Sentencia C-832 de 2001.

⁴⁹ Ver prueba 22. Expediente penal amenazas



3.3.2. De la imputación del daño a las entidades demandadas

Los daños padecidos por las víctimas principales y su grupo familiar, se imputan a las entidades demandadas: **La Nación - Ministerio de Defensa Nacional, La Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y el Municipio de Pereira** porque siendo éstas conocedoras de sus obligaciones constitucionales y legales, incurrieron en conductas violatorias de sus deberes funcionales impuestas por Ley, difundiendo información falsa, haciendo pasar la actuación administrativa donde se ordenaba la demolición de un inmueble que amenazaba ruina como un falso positivo donde si bien se llevó a cabo el derribamiento de la vivienda, se indicó que ese hecho se debía a que allí se efectuaban acciones ilícitas de expendio y consumo de estupefacientes, siendo frecuentada la vivienda por habitantes de calle, lo que había generado una situación de inseguridad en el sector; información que fue manipulada por miembros de la Policía Nacional y que fue difundida en rueda de prensa por parte del entonces Ministerio de la Defensa y el Alcalde del Municipio de Pereira, quienes mostraron el hecho como un parte de victoria contra la delincuencia.

Lo anterior vulnerando derechos como el debido proceso, el respeto de la dignidad humana, el derecho a honra, y al buen nombre, así como protección a la intimidad de las personas, y propender siempre por la protección y seguridad de la comunidad, deberes que, entre otros son la razón de ser de dichas entidades y que fueron vulnerados, pues las entidades demandadas con sus acciones y omisiones irrogaron el daño a los demandantes.

Por un lado, **el Ministerio de la Defensa**, mostró como un resultado positivo el derribamiento del inmueble ubicado en la calle 11 N° 5-16 de la ciudad de Pereira, asegurando sin verificar la información y basado en la actuación de la Policía, que allí funcionaba un lugar de expendio y consumo de sustancias alucinógenas, siendo este el motivo del derribamiento del inmueble; afirmaciones que no correspondían a la realidad.

La Policía Nacional, mediante funcionarios de distintas dependencias se orquestó el montaje realizado frente al bien inmueble, así:

Primero: indagaron con el Inspector de Policía 15 de Pereira los inmuebles que tuvieran medida de demolición como consecuencia de proceso policivo administrativo, siendo reportado por el funcionario el ubicado en calle 11 N° 5-16 de la ciudad de Pereira. Prueba de ello son los mensajes vía whatsapp que fueron aportados en la investigación penal militar, en los que el capitán Julián Botero indaga sobre el bien inmueble en mención, manifiesta que este es un foco de inseguridad, y que enviará investigadores al lugar⁵⁰.

Segundo: con dicha información miembros de la Policía Nacional se dirigieron al lugar y tomaron imágenes del inmueble para verificar si cumplía con los requisitos del “Plan 1000 actividades contra el micro tráfico”, según la versión libre rendida por la Subteniente Luisa Maria Mora Rincon y el Patrullero David Fernando Hernandez Loaiza.

Tercero: elaborando el un montaje de falso escenario de los hechos, la Policía Nacional procede a ingresar al inmueble algunas personas en condición de calle a quienes al parecer, les pagaron para “hacerse pasar” como consumidores de estupefacientes.⁵¹.

⁵⁰ Ver prueba 21. Cuaderno 3 expediente penal militar. Páginas 87 a la 106

⁵¹ Ver Prueba 20 Cuaderno 2 folio 298



cumplía las funciones de COEST DIJIN, no sé el nombre de ese MAYOR. **PREGUNTADO:** Se encuentra usted en la capacidad de identificar a esa persona que refiere como el MAYOR integrante de COEST DIJIN. **RESPONDIO:** Si, él era de tez blanca, aunque en este momento se me dificulta describirlo, pero viéndolo yo sé quién es. **PREGUNTADO:** cuando usted llega al lugar que funcionarios de los que refirió se encontraban dentro de la vivienda. **RESPONDIO:** Cuando yo llego ellos estaban afuera, la vivienda está cerrada, uno de los funcionarios de la SIJIN que acompañaba al CT BOTERO abre la puerta, al abrir la puerta yo observo una vivienda por dentro en pésimas condiciones y en estado de abandono, solo eso. **PREGUNTADO:** En qué momento son ingresadas a la vivienda las personas que simulaban consumir sustancias para las tomas de video. **RESPONDIO:** Al momento de abrir la vivienda, las personas estaban afuera, eran habitantes de calle, los de la SIJIN y DIJIN que se encontraban en el lugar les dijeron a las personas que siguieran. **PREGUNTADO:** Que funcionario les dio las indicaciones a estas personas para que simularan el consumo de sustancias mientras usted realizaba las tomas de video. **RESPONDIO:** Mi CT BOTERO, les dice que ingresen y que simulen que se está consumiendo. **PREGUNTADO:** En algún momento usted dio indicaciones a estas personas para que simularan el consumo de sustancias mientras usted realizaba las tomas de video. **RESPONDIO:** Si, de donde se debían de ubicar, hágase aquí, hágase aca, solo de donde debían estar. **PREGUNTADO:** En algún momento estas personas portaron o consumieron sustancias estupefacientes frente a los institucionales que se encontraban en la vivienda. **RESPONDIO:** No señor en ningún momento, fue solamente una simulación de estar fumando. **PREGUNTADO:** Durante la toma de los videos a las personas que estaban simulando el consumo de sustancias dentro del inmueble estuvieron presentes, además del CT BOTERO, los funcionarios de la DIJIN. **RESPONDIO:**

Cuarto: el señor Armando Sánchez, fue asaltado en su buena fe por los miembros de la Policía Nacional a quien le hicieron creer que se debía realizar una inspección al inmueble como parte del proceso administrativo de demolición, con el único fin de obtener el acceso para grabar los supuestos consumidores, lo cual constituye una evidente violación al principio de confianza legítima. Así mismo, la entidad dispuso de toda la logística para llevar a cabo la rueda de prensa en la que se entregó información falsa señalando el inmueble como un lugar de alta peligrosidad que era utilizado para expendio y consumo de estupefacientes.

Quinto: la **Oficina de Control Disciplinario** de la Policía Metropolitana de Pereira, de oficio, aperturó una indagación preliminar, bajo el radicado SIED2D EE-MEPER-2022-65, la cual fue remitida por competencia a la Inspección General de la Policía Nacional de Bogotá⁵².

El 2 de abril de 2022 la Dirección Nacional de la Policía Nacional relevó del cargo al comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, al subcomandante y al comandante operativo, de igual manera a los Jefes de Investigación Judicial de la Dijin de la regional de Investigación criminal de la región N° 3, al igual que de la seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Pereira y al Jefe de Comunicaciones estratégicas de la Dijin:

⁵² Ver prueba 10. Derecho de petición MEPER



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Oficina de Comunicaciones Estratégicas
Dirección General

Abril 2 de 2022

COMUNICADO

La Dirección General de la Policía Nacional se permite informar:

1. En el marco de las actuaciones disciplinarias que se adelantan tras la demolición de un inmueble del barrio La Libertad de Pereira, el pasado 18 de marzo, como parte de la estrategia contra el microtráfico, se tomó la decisión de relevar del cargo al comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Aníbal Villamizar Serrano; al subcomandante, coronel John Fredy Falla Varón; y al comandante operativo, teniente coronel Dewi Xiomara Jácome González.
2. Así mismo, se relevan de su cargo el coronel Carlos Andrés García Suárez como Jefe de Investigación Judicial de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN); la teniente coronel Ana Gabriela Gutiérrez Naranjo, jefe de la Regional de Investigación Criminal de la Región N.º 3., y el mayor Wilmer Delgado Herrera, jefe de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Pereira. Igualmente, el mayor César Alfonso Bohórquez Salcedo, jefe de Comunicaciones Estratégicas de la DIJIN.
3. Como comandante de la Policía Metropolitana de Pereira fue designado el coronel Javier Raúl Gallego Duque, quien se desempeñaba como comandante del Departamento de Policía Risaralda.
4. Al Comando del Departamento de Policía Risaralda llega en calidad de encargo el teniente coronel Paulo César Cruz Delgadillo, quien estaba a cargo del Subcomando de la misma unidad.

Al mismo tiempo, se inició la **investigación de carácter penal** por los mencionados hechos, la cual se encuentra a cargo del Juzgado 167 Penal Militar de la ciudad de Pereira. Producto de la investigación penal **fueron capturados** los señores: **coronel Carlos Andrés García Suárez, quien se venía desempeñando como subcomandante de la Policía en Cucúta**, los mayores César Alfonso Bohórquez Salcedo (en curso de ascenso al grado de teniente coronel) y Wilmer Delgado Herrera; el Capitán Héctor Julián Botero Sánchez, el Teniente Jarrixon Peralta Sánchez y el Subintendente, Rutber Vega Ramírez, **presuntos responsables de los delitos abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.**

Por su parte **el Municipio de Pereira**, a través del alcalde municipal convalidó el falso teatro montado por miembros de la Policía Nacional y reiteró en rueda de prensa los señalamientos hechos por el Ministerio de Defensa, aun cuando se tenía el conocimiento de que lo que había sucedido era que la inspección 15 de policía había impuesto una medida correctiva de demolición por amenaza de ruina, sin embargo, esta autoridad sacó provecho del impacto mediático que causó este derribamiento para mostrarlo como un resultado positivo contra la delincuencia, sin verificar las realidades de los hechos y por el contrario, ratificando el falso positivo para presentar resultados favorables en contra la actividad delictiva en la ciudad de Pereira.

Para el día 30 de marzo de 2022, una vez dado a conocer el montaje por medios de comunicación, el Alcalde Municipal para la época de los hechos, en rueda de prensa ofreció disculpas públicas y condenó las falsas informaciones, por lo cual solicitó la investigación y el retiro del Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, aun cuando se conocía que el inmueble era objeto de un proceso policivo adelantado porque el inmueble amenazaba ruina más no porque allí se cometieran actos



delictivos de venta y consumo de estupefacientes, tal como fue presentado a la opinión pública, siendo este el fundamento para su demolición ya que se indicó que era un lugar inseguro para la comunidad del sector.

A raíz de las falsas afirmaciones los integrantes de la familia que habitaba en dicho inmueble, recibieron amenazas⁵³ contra su vida por parte de grupos al margen de la ley, quienes manifestaron que se estaba realizando un expendio de drogas “sin su autorización”, pues es bien sabido del manejo de negocios de micro tráfico por parte de esta clase de grupos.

Así mismo se vio entre dicho el buen nombre y la honra de unos ciudadanos que siempre han mostrado honorabilidad y probidad en todos los aspectos de su vida, siendo menoscabado por la administración, extralimitando sus funciones y causando un daño que la familia afectada no se encontraba en la obligación de soportar, ahora bien, respecto al proceso policivo adelantado por la administración municipal, fue violentado gravemente el principio de la confianza legítima los ciudadanos afectados, quienes creían plenamente el actuar legítimo de las entidades, pero contrario a ello fueron instrumentalizados por la administración para fines distintos pues el proceso policivo y su inmueble fueron utilizados como fachada para mostrar resultados positivos para reducir índices de delincuencia en la ciudad de Pereira.

3.3.3. Del nexo de causalidad existente entre el daño y la imputación

El daño causado a los civiles hoy aquí demandantes, es imputable a **La Nación - Ministerio de Defensa Nacional, La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, Municipio de Pereira**, por las siguientes razones:

El inmueble derribado propiedad de la señora Teresa Sánchez Jaramillo (q.e.p.d) estaba vinculado a un proceso verbal abreviado dentro de la Inspección 15 de Policía de Pereira, razón por la cual se dispuso como medida correctiva la demolición del inmueble ubicado en la calle 11 N° 5-16 de la ciudad de Pereira, ya que existía una inminente amenaza de ruina de la vivienda.

La Policía Nacional abusando de su autoridad y de manera irregular utilizó y se valió de la actuación administrativa tendiente a efectuar la demolición de un inmueble para realizar un montaje configurando aparentemente, un falso escenario de los hechos, indicando que el inmueble se procedía a demoler pues se trataba de un sitio de expendio y consumo de estupefacientes frecuentado por habitantes de calle que se había convertido en foco de delincuencia, razón por la que los hechos fueron mostrados como un resultado positivo frente a la lucha contra el microtráfico y que el derribamiento del inmueble se hacía pues se había convertido en un mito de inseguridad en la ciudad de Pereira.

El Ministerio de Defensa, La Policía Metropolitana de Pereira y la Alcaldía de Pereira convocaron a rueda de prensa a los medios de comunicación para que se hicieran presentes el día 18 de marzo del 2022, en el bien inmueble ubicado en la calle 11 #5-16 del barrio La Libertad de Pereira, hecho que fue denominado como **“derribamiento de un mito de inseguridad que afectaba a la comunidad del barrio La libertad en la ciudad de Pereira.”**⁵⁴

A dicho evento, concurrieron entre otros, el entonces señor Ministro de Defensa Dr. Diego Molano Aponte, el entonces Alcalde de Pereira señor Carlos Alberto Maya

⁵³ Ver prueba 22. Expediente penal amenazas.

⁵⁴ Ver prueba 14. Citación rueda de prensa



López y el Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira; el señor Coronel Aníbal Villamizar varios integrantes de la Policía Nacional.

El Ministro de Defensa en la rueda de prensa afirmó ante los medios de comunicación que esta vivienda era un sitio de expendio y consumo de estupefacientes frecuentado por habitantes de calle que generaba inseguridad en el sector y que el inmueble era una “guarida para atracadores”. Así mismo, reconoció públicamente que el bien inmueble era propiedad del señor Armando Sánchez quien lo había perdido por las actuaciones delictivas que en la vivienda se presentaban y que ese día el mencionado adulto mayor recuperaba su inmueble⁵⁵.

En esa misma rueda de prensa, el entonces Alcalde Municipal de Pereira, agradeció al Ministro de la Defensa y a la Policía Nacional la recuperación del inmueble, así mismo, aseguro que en la vivienda se llevaban a cabo actividades de comercialización y distribución de estupefacientes, y exaltó el derrivamiento del bien inmueble como una medida ejemplarizante, aún cuando la Alcaldía de Pereira conocía que sobre este bien inmueble pesaba una medida policiva correctiva por el posible colapso de la vivienda, situación sustancialmente diferente a la que fue manifestada y en la que se hacía referencia a conductas delictivas por comercialización y consumo de estupefacientes.

Posterior a ello, y tras nueva rueda de prensa convocada por el Alcalde de Pereira, los medios de comunicación locales y nacionales transmitieron noticias del operativo policial realizado en la ciudad de Pereira, el cual fue tildado como una “mentira fabricada por la Policía Nacional”, operativo que afectó de manera grave la integridad de las víctimas directa y su grupo familiar.

Así las cosas, se encuentra probado el daño a través de toda la prueba documental que se aporta y al estar demostrado que tanto El Ministerio de Defensa Nacional, como la Policía Nacional y el Municipio de Pereira, se extralimitaron en sus funciones, al mostrar hechos que no correspondían a la realidad y realizar graves señalamientos que afectaron a los demandantes que contribuyeron a la materialización del hecho y por tanto al daño antijurídico que deberá ser indemnizado.

4. Declaraciones y Condenas

Las pretensiones que se buscan conciliar en esta oportunidad, y que se han de formular a través del medio de control de *Reparación Directa* en el evento de que se declare fallida la audiencia de conciliación, son las siguientes:

4.1 Declárese que La Nación- Ministerio de Defensa, La Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, y Municipio de Pereira son administrativa, patrimonial, extracontractual y solidariamente responsables por la causación del daño antijurídico que se reclama, así:

4.2 Como consecuencia de la anterior declaración, se **condene a las accionadas** al reconocimiento y pago de los siguientes perjuicios:

⁵⁵ Ver prueba 15. Video rueda de prensa



4.2.1 DAÑO INMATERIAL - PERJUICIOS MORALES

Nombre	Calidad frente a la Víctima	Valor Solicitado
Masa sucesoral de la señora Teresa Sánchez	Víctima directa	300 SMLMV
Armando Sánchez	Víctima directa	200 SMLMV
Maria Leticia Guerrero Melchor	Compañera permanente de armando	100 SMLMV
Carlos Andrés Sánchez Guerrero	Hijo de Armando	100 SMLMV
Maria Camila Sánchez Obando	Nieta	100 SMLMV
Luz Nancy Guerrero Melchor	Cuñada	100 SMLMV
Valentina Guerrero Melchor	Sobrina política	50 SMLMV

4.2.2 DAÑO INMATERIAL POR AFECTACIÓN RELEVANTE A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS POR LA EXTRALIMITACION DE FUNCIONES Y FALSOS SEÑALAMIENTOS POR PARTE DE LAS DEMANDADAS

A título de reparación integral solicito que las entidades accionadas:

- Publiquen en diario de amplia circulación nacional la sentencia condenatoria o el acuerdo conciliatorio.
- Realicen un acto público de reconocimiento de responsabilidad dentro de los hechos ocurridos el pasado 18 de marzo de 2022.
- Pidan excusas públicas a nivel nacional por los hechos ocurridos.

Con lo anterior, se busca reparar el daño ocasionado después de los falsos señalamientos que se hicieron por parte de las autoridades, generar un estado de reconciliación por parte de sus familiares; así como buscar medidas de no repetición con la población.

En este caso se encuentra configurado este perjuicios teniendo en cuenta que los hechos acaecidos fueron producto de un “falso positivo” ejecutado por las entidades demandadas para demostrar resultados contra la delincuencia en Pereira, llevándose a cabo la demolición del inmueble ubicado en la calle 11 No 5-16 del Barrio la Libertad de la ciudad de Pereira el 18 de marzo de 2022, donde representantes de las entidades demandadas convocaron rueda de prensa y ante los medios de comunicación nacionales y regionales, señalaron dicho inmueble como sitio de expendio y consumo de alucinógenos; así mismo, indicaron que era un foco de inseguridad para la comunidad; afirmaciones que fueron producto de un montaje como consecuencia de las fallas en el servicio en las que incurrieron las demandadas, las cuales causaron graves afectaciones al derecho a la honra y el buen nombre de las víctimas, habida cuenta que fueron señalados por la comunidad como personas que desarrollaban actividades ilícitas e incluso interpusieron denuncia ante la Fiscalía por amenazas.

Referente al daño inmaterial por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, el Honorable Consejo de Estado



mediante sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, radicado 05001-23-25-000-1999-01063-01 (32988). Señaló:

“15.3. Al respecto la Sala reitera los criterios expuestos en la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección del 14 de septiembre de 2011, en la cual se sostuvo que esta clase de afectaciones a bienes o derechos constitucional o convencionalmente afectados deben ser reconocidos como una tercera categoría de daños inmateriales autónomos. Bajo esta óptica, se sistematizó en su momento de la siguiente manera: La tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación.

15.4. Así, en los casos de perjuicios por vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, se reafirman los criterios contenidos en la sentencia precitada. En esta oportunidad la Sala, para efectos de unificación de la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, precisa:

15.4.1. El daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las siguientes características:

i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.

ii) Se trata de **vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.**

iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.

iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.

15.4.2. La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos:

i) El objetivo de reparar este daño es el de **restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos.** La reparación de la víctima está orientada a: (a) **restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva;** (b) **lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las**



posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial.

ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia.

iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas "de crianza", en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos.

iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado.

v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobando las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional.

vi) Es un daño frente al cual se confirme el rol del juez de responsabilidad extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas."

Según lo señalado por el máximo órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el presente asunto se cumple con los requisitos para la configuración del daño inmaterial por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, pues con el actuar de las entidades demandadas se vulneraron derechos de raigambre convencional y constitucional, como lo es la honra y el buen nombre, los cuales solo pueden ser remediados adoptando las medidas solicitadas, como garantía de reparación a las víctimas.

Teniendo en cuenta que las medidas solicitadas no son suficientes para reparar de forma integral el grupo familiar demandante y en el entendido que existe la obligación de indemnizar los daños inmateriales por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados de manera separada y



al constituirse en una categoría de perjuicios según el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, solicito reconocer y pagar a favor de:

Nombre	Calidad frente a la Víctima	Valor Solicitado
Masa sucesoral de la señora Teresa Sánchez	Víctima directa	300 SMLMV
Armando Sánchez	Víctima directa	200 SMLMV
Maria Leticia Guerrero Melchor	Compañera permanente de armando	100 SMLMV
Carlos Andrés Sánchez Guerrero	Hijo de Armando	100 SMLMV
Maria Camila Sánchez Obando	Nieta	100 SMLMV
Luz Nancy Guerrero Melchor	Cuñada	100 SMLMV
Valentina Guerrero Melchor	Sobrina política	50 SMLMV

4.2.3 **DAÑOS A LA SALUD POR LA EXTRALIMITACION DE FUNCIONES Y FALSOS SEÑALAMIENTOS**

Frente a esta pretensión, es importante señalar que se pide en favor de la masa sucesoral de la señora Teresa Sánchez, habida cuenta de que el fallecimiento de esta se dio el día 20 de junio de 2023 y la fecha de los hechos es el 18 de marzo de 2022, es decir, durante ese año y tres meses se produjo el daño a la salud de la señora Teresa Sánchez, debido a la angustia y congoja causada por los falsos señalamientos que se hacían en su contra y en contra de su familia dejando entredicho su honra y buen nombre, ocasionando profunda afectación a la salud a la señora Teresa Sánchez y demás demandantes por verse señalados por la sociedad como personas que realizaban actividades delictivas.

Nombre	Calidad frente a la Víctima	Valor Solicitado
Masa sucesoral de la señora Teresa Sánchez	Víctima directa	300 SMLMV
Armando Sánchez	Víctima directa	200 SMLMV
Maria Leticia Guerrero Melchor	Compañera permanente de armando	100 SMLMV
Carlos Andrés Sánchez Guerrero	Hijo de Armando	100 SMLMV
Maria Camila Sánchez Obando	Nieta	100 SMLMV
Luz Nancy Guerrero Melchor	Cuñada	100 SMLMV
Valentina Guerrero Melchor	Sobrina política	50 SMLMV

4.3. Que se condene al pago de los intereses de las sumas líquidas de dinero determinadas en la decisión que ponga fin al proceso y que se generen a partir de la fecha de la sentencia o del auto aprobatorio de la conciliación judicial, según sea el caso, pagaderos a los demandantes o a quien o quienes sus derechos representaren en el momento del fallo.



4.4. Según el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, condénese a los entes públicos convocados a cancelar las costas y agencias en derecho correspondientes en los términos del artículo 361 del Código General del Proceso.

4.5. Los entes públicos convocados darán cumplimiento a la conciliación o sentencia dentro de los 10 meses siguientes a la fecha de su ejecutoria, de conformidad con el inciso 2° del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

5. Pruebas

5.3. Documentales

Se aportan en formato PDF, las siguientes pruebas documentales, a fin de que obren en el plenario y se les otorgue el valor que legalmente se les atribuye:

Prueba 1: Documentos de identidad.

Prueba 2: Copia de los registros civiles de nacimiento de las personas que a continuación se relacionan:

- Armando Sánchez
- Carlos Andrés Sánchez Guerrero
- María Camila Sánchez Obando
- María Leticia Guerrero Melchor
- Luz Nancy Guerrero Melchor
- Libia Guerrero Melchor
- Valentina Guerrero Melchor

Prueba 3: Registro civil de defunción de la señora Teresa Sánchez Jaramillo (q.e.p.d).

Prueba 4: Registro civil de defunción de la señora Graciela Jaramillo Arango (q.e.p.d).

Prueba 5: Expediente inspección de Policía

Prueba 6: Derecho de petición dirigido a la Jefatura de la Seccional de Investigación criminal de Pereira Sijin, con la respectiva constancia de radicación y respuesta emitida.

Prueba 7: Derecho de petición dirigido al Ministerio de Defensa Nacional, con la respectiva constancia de radicación y respuesta emitida.

Prueba 8: Derecho de petición dirigido a la Secretaría de Gobierno- Alcaldía de Pereira, con la respectiva constancia de radicación y respuesta emitida.

Prueba 9: Derecho de petición dirigido a la Fiscalía General de la Nación, con la respectiva constancia de radicación y respuesta emitida.



Prueba 10: Derecho de petición dirigido a la Policía Metropolitana de Pereira, con la respectiva constancia de radicación y respuesta remitida.

Prueba 11: Escritura pública de testamento abierto.

Prueba 12: Certificado de tradición.

Prueba 13: Declaración extrajuicio compañeros permanentes.

Prueba 14: Citación rueda de prensa.

Prueba 15: Video rueda de prensa demolición.

Prueba 16: Video anuncio destituciones, disculpas públicas.

Prueba 17: Video noticias UNO, demolición.

Prueba 18: Video habitante de calle.

Prueba 19: Noticias captura policías implicados.

Prueba 20: Cuaderno 2 expediente penal militar.

Prueba 21: Cuaderno 3 expediente penal militar.

Pruebas 22: Expediente penal amenazas.

Prueba 23. Nulidad del proceso penal militar.

5.2. Testimoniales

Respetuosamente se solicita al Juez de lo Contencioso Administrativo (Reparto), el decreto como prueba dentro de la presente acción de reparación directa, del testimonio de las siguientes personas:

- El testimonio de la señora Yany Paola Triviño Bedoya identificada con cedula de ciudadanía No. 24.338.760 quien puede ser ubicada en la dirección física Manzana 23 casa 2, segundo piso del Barrio Galán de la Ciudad de Pereira, Risaralda, al número de celular 31133049230, y al buzón electrónico yanypao.tribedoya@gmail.com.
- El testimonio de la señora Nelcy Lorena Guevara Díaz, identificada con a con cedula de ciudadanía No. 1.088.280.043, quien puede ser ubicada en la dirección física Calle 23 # 2-29 del Barrio San Jorge de la ciudad de Pereira, Risaralda, al número de celular 3137155843 y al buzón electrónico lorenaguevaradiaz312@hotmail.com.
- El testimonio del Señor Israel de Jesús Bedoya Acevedo, identificado con a con cedula de ciudadanía No. 9.957.322, quien puede ser ubicado en la dirección física Calle 13 # 5-28 del Barrio Centro de la ciudad de Pereira,



Risaralda, al número de celular 3044793310 y al buzón electrónico mundoistal@hotmail.com.

- El testimonio de la señora Diana Carolina Giraldo Arandia, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.088.024.684, quien puede ser ubicada en la dirección física Manzana 7 Casa 17 Barrio la Esneda de la ciudad de Pereira, Risaralda, al número de celular 3143779221y al buzón electrónico carolinagiraldo926@gmail.com.
- El testimonio del señor John Fredy Espinosa Guarín, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.817.808, quien puede ser ubicado en la dirección física Carrera 3 # 22-32 del Barrio San Jorge de la ciudad de Pereira, Risaralda, al número de celular 3207246021, no posee correo electrónico.
- El testimonio de la señora Mary Luz Barandica Lozano, identificada con la cedula de ciudadanía No. 39.676.004, quien puede ser ubicada en la dirección física Calle 17 Bis # 8ª-19 del Barrio Laurel de la ciudad de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, al número de celular 3202524149 y al buzón electrónico crucita1979@outlook.es
- El testimonio del señor Reinaldo Antonio Villamil Murillo, identificado con a con cedula de ciudadanía No. 10.252.113, quien puede ser ubicado en la dirección física Calle 11 # 5-38 del Barrio Centro de la ciudad de Pereira, Risaralda, al número de celular 3136538933 y al buzón electrónico innovar.publicidad@hotmail.com.
- El testimonio del señor Wilson Geovani García Torres, identificado con a con cedula de ciudadanía No. 9.735.051, quien puede ser ubicado en la dirección física Calle 11 # 5-10 del Barrio Centro de la ciudad de Pereira, Risaralda, al número de celular 3225241799 y al buzón electrónico wigeotor@hotmail.com.
- El testimonio de la señora Dora Gladis González Rojas, identificada con a con cedula de ciudadanía No. 42.050.014, quien puede ser ubicada en la dirección física Carrera 16 #17 – 20conjunto residencial portal de la Pradera Torre A Apartamento 603 de la ciudad de Dosquebradas, Risaralda, al número de celular 3168577058 y al buzón electrónico doraehijos01@gmail.com.
- El testimonio del señor Jorge Iván Tobón Castro, identificado con a con cedula de ciudadanía No. 10.130.698, quien puede ser ubicada en la dirección física Carrera 16 #17 – 20conjunto residencial portal de la Pradera Torre A Apartamento 603 de la ciudad de Dosquebradas, Risaralda, al número de celular 3052654204 y al buzón electrónico doraehijos01@gmail.com.

5.2.1. Objeto de la prueba:

Las personas relacionadas, rendirán testimonio en audiencia de pruebas en la fecha y hora que para tales efectos señale el Despacho y absolverán el interrogatorio que se les formulará de manera verbal o por escrito, respecto de los hechos sobre los cuales se cimienta el ejercicio del presente medio de control, y respecto de los



perjuicios que dichos hechos causaron al grupo demandante, y se pronunciarán respecto de los siguientes puntos:

- Indicarán si conocen al señor Armando Sánchez, de cuánto tiempo atrás y en razón a qué.
- Indicarán lo que sepan o conozcan respecto de los hechos constitutivos del falso positivo policial que conllevó a la demolición del inmueble ubicado en la calle 11 No 5-16 del Barrio la Libertad de la ciudad de Pereira, el 18 de marzo de 2022, señalando el sitio como de expendio y consumo de estupefacientes.
- Se les interrogará respecto de las relaciones interpersonales que sostenía el señor Armando Sánchez con su grupo familiar, para la época de los hechos y las consecuencias que trajo el hecho que el inmueble demolido hubiese sido señalado como sitio de expendio y consumo de estupefacientes.
- Dará cuenta, si lo sabe o conoce, respecto de las afectaciones morales y psicológicas sufridas por el señor Armando Sánchez y todo su grupo familiar como consecuencia de los señalamientos que se les hicieron a raíz de la demolición del inmueble señalado como sitio de expendio y consumo de estupefacientes.
- En general, los testigos rendirán declaración respecto de todo aquellos que les conste o sepan respecto de los hechos y pretensiones que se encuentran consignados en el presente libelo.

En virtud de lo anterior, y encontrándose configurados los requisitos establecidos por el artículo 173 del CGP para la procedencia de las solicitudes probatorias, así como los presupuestos de utilidad, pertinencia y necesidad de la misma, el suscrito apoderado estima pertinente que por parte del Despacho se debe declarar de oficio las pruebas enunciadas en los términos solicitados en párrafos anteriores.

5.3. Solicitudes probatorias

El artículo 173 del Código General Del Proceso- Ley 1564 de 2012 indica que, en aras de ser apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la investigación penal militar, la investigación disciplinaria y penal se encuentra en curso, se hace esta solicitud probatoria para que sean allegadas las actuaciones que hayan acontecido hasta el decreto de la prueba, por lo anterior de manera respetuosa le solicito a su señoría sea decretada la siguiente prueba documental para ser arrimada al proceso:

- Oficiar al **Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar y Policial**, para que remita **copia actualizada** del proceso penal 54, que cursa en el mencionado despacho en contra de los señores policiales Carlos Andrés García Suárez, César Alfonso Bohórquez, Wilmar Delgado Herrera, Héctor Julián Botero Sánchez, Jarrixon Peralta Sánchez y Rutber Vega Ramírez.



- Oficiar a la **Fiscalía 10 Seccional de la ciudad de Pereira**, para que remita **copia actualizada** del proceso penal radicado **660016000036202312595**, procedimiento penal que se sigue por el presunto delito de amenazas en contra de las víctimas.
- Oficiar a la **Inspección General y Responsabilidad profesional de la Policía Nacional**, para que remita **copia actualizada** de la investigación disciplinaria radicado **SIE2D EE-MEPER-2022-65**, el cual se sigue en ese despacho por los hechos aquí narrados, lo anterior, por cuanto tal como obra en la prueba 10 de la demanda, la entidad se negó a aportar dicho dossier.

6. Estimación razonada de la cuantía

El numeral 6° del artículo 162 del *Código de Procedimiento Administrativo y lo Contenciosos Administrativo* –Ley 1437 de 2011-, establece como requisito formal, la exposición razonada y discriminada de la cuantía. Para efectos de esta demanda se estima la cuantía en la suma de **300 SMLMV equivalentes a TRECIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$390.000.000)**, por concepto de **daño moral**, sin que se limite la misma, tal como lo expone el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 32 de la ley 2080 de 2021.

7. Caducidad de la acción

Al tenor de lo previsto en el numeral 2° literal i. del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la demanda en ejercicio del medio de control de *Reparación Directa* debe promoverse dentro de los dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño.

En vista de que la consolidación del daño objeto de la presente acción se concreta con el falso positivo, data del día **18 de marzo de 2022**, la caducidad de la acción se estima, inicialmente para el día **19 de marzo de 2024**, sin embargo, comoquiera que la solicitud de conciliación extrajudicial fue radicada el pasado **8 de marzo de 2024**, hecho que interrumpió el termino de caducidad, quedando así **10 días** para que feneciera el termino para interponer la acción correspondiente.

La audiencia de conciliación extrajudicial fue realizada el día **8 de mayo de 2024**, por esta razón y una vez reanudado el termino de caducidad, se tiene hasta el día **19 de mayo de 2024** para interponer la demanda, por esta razón nos encontramos en termino para radicar la respectiva demanda.

8. Competencia de los Jueces Administrativos del Circuito

Para la determinación de la competencia en el presente caso, obsérvese las siguientes consideraciones:

Por el factor de la cuantía, consagrado en el artículo 157 del CPACA, además, del artículo 155 ibídem en su numeral 6, y en atención a lo establecido en artículo 156 numeral 6° relacionado ad supra, se tiene a elección de los demandantes como lugar de presentación de la presente demanda, la **ciudad de Bogotá D.C.**, por el lugar de ocurrencia de los hechos; asimismo, teniendo en cuenta que la cuantía no excede de los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que corresponde a



los señores **Jueces Administrativos del Circuito de Bogotá (Reparto)** conocer del presente asunto.

9. Notificaciones

De conformidad con lo consagrado en el numeral 7 del artículo 162 del CPACA⁵⁶, así como el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, informo al Despacho que, las direcciones físicas y electrónicas que se citan a continuación, son las designadas por las respectivas entidades para recibir las notificaciones judiciales de acuerdo con lo publicado en sus páginas web, así como las proporcionadas por los demandantes:

9.3. Las entidades demandadas:

9.3.1. La Nación - Ministerio de Defensa.

Recibirá notificaciones en los siguientes apartados:

Dirección (es):

- Carrera 54 No. 26-25 CAN, Bogotá – Cundinamarca
- Teléfonos: +57(601) 5159111

E-mail (s):

notificaciones.prejudiciales@mindefensa.gov.co

Extraído de:

<https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa/contenido?NavigationTarget=navurl://4cd03771c91c89c884837d8f07309b1e>

9.3.2. La Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

Recibirá notificaciones en los siguientes apartados:

- Carrera 59, 26-21 CAN, Bogotá – Cundinamarca (Policía Nacional)
- Teléfonos:
+57(601) 5159111
+57 (601) 3150111.

E-mail (s):

decun.notificaciones@policia.gov.co

Extraído de: <https://www.policia.gov.co/normatividad-juridica/notificaciones-electronicas>

9.3.3. Municipio de Pereira- Risaralda

Recibirá notificaciones en los siguientes apartados:

- Dirección: Cra. 7 No. 18-55 Pereira - Risaralda.
- Teléfonos:(+57) 6 3248000 - 6 3248179

E-mail (s): notificaciones_judicialesalcaldia@pereira.gov.co

Extraído de: <https://www.pereira.gov.co/publicaciones/573/notificaciones-judiciales/>

⁵⁶ Modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021.



9.4. Los demandantes y el apoderado.

9.4.1. Los demandantes

Conforme con lo establecido en el numeral 7º del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011 el cual fue modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, se señalan como apartado de notificación de los demandantes los siguientes abonados:

Dirección: Calle 11 # 5-30 primer piso, Pereira- Risaralda.
teléfono: 3135159327 Email sanchezquerrero05@gmail.com

9.4.2. La Sociedad apoderada.

LEGALGROUP Especialistas en Derecho S.A.S, persona jurídica apoderado de los demandantes en el presente proceso, recibirá notificaciones en los siguientes apartados:

Dirección: Carrera 12B # 8- 45 Sector Circunvalar, (Pereira - Risaralda).
Teléfonos: (6) 3211812- Celular 3174364677 – 3014549829.

Correos electrónico: notificaciones@legalgroup.com.co

La dirección de correo electrónico señalada, es la registrada por la persona jurídica que represento como dirección para notificaciones judiciales en el certificado de existencia y representación legal, de igual manera esta dirección se encuentra debidamente inscrita en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados -SIRNA- de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, como correo electrónico del suscrito apoderado.

9.5. Traslado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

De conformidad con el inciso 6 del artículo 612 de la Ley 1564 de 2012, modificatoria del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, recibirá notificaciones en calle 16 # 68D-89, barrio Montevideo, Bogotá D.C. y a través de la página web: www.defensajuridica.gov.co, correo para notificaciones notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co

13. Solicitud de notificación electrónica – artículo 205 del CPACA

El Consejo de Estado-Sección Cuarta estableció a través de sentencia 25000-23-42-000-2017-06175-01⁵⁷ del 17 de mayo de 2018, que el envío de los mensajes de datos para llevar a cabo las notificaciones por estado electrónico, **no es facultativo, sino que es una obligación de las autoridades judiciales**, acatando las normas procesales en aras de garantizar la efectividad del derecho al debido proceso, requiriendo únicamente, que el interesado haya manifestado su deseo y haya aportado la dirección de correo electrónico correspondiente para recibir notificaciones electrónicas.

⁵⁷ Sentencia del 17 de mayo de 2018, radicado 25000-23-42-000-2017-06175-01, magistrado ponente Milton Chaves García, establece que: "El artículo 201 del CPACA establece que una vez efectuada la anotación en estados electrónicos, los secretarios de los despachos judiciales deben enviar un mensaje de datos a quienes hayan suministrado su dirección electrónica en el proceso. Por tanto, el envío de dicho mensaje no puede ser considerado como un acto facultativo - interpretación que resultaría restrictiva y contraria al principio pro homine, pues contrario a ello, la obligación de las autoridades judiciales es acatar las normas procesales en aras de garantizar la efectividad del derecho al debido proceso. No es aceptable el argumento del demandado en el sentido de que la omisión en el envío del mensaje de datos por correo electrónico no invalida la notificación por estado efectuada. Esto, por cuanto de acuerdo con el artículo 201 del CPACA, dicho envío hace parte de la notificación por estados."



En razón a lo anterior solicito y autorizo de forma expresa que todas las decisiones y citaciones que adopte el despacho, tal como lo señala el Consejo de Estado y el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011 me sean notificadas al siguiente correo electrónico: notificaciones@legalgroup.com.co

14. Anexos

Anexo 1: Poderes para actuar.

Anexo 2: Certificado de existencia y representación legal de Legalgroup Especialistas en Derecho S.A.S.

Anexo 3 Constancia de notificación de la demanda a las entidades demandas y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado —ANDJE.

Anexo 4: Certificado SIRNA

Atentamente,

JONATHAN VELÁSQUEZ SEPÚLVEDA

Representante legal de Legalgroup especialistas en derecho S.A.S

Cédula de ciudadanía 1.116.238.813

Tarjeta profesional 199.083 del Consejo Superior de la Judicatura

Proyectó: FBR
Revisó: PAGC